



DOCUMENTO POLÍTICO

**CAMBIAR TODO LO QUE NO
PODEMOS ACEPTAR.**

LA IZQUIERDA EN PIE.

V Asamblea
Ciudadana Estatal
de Podemos

**ORGU
LLOSA
MENTE
PODEMOS**

I. Índice

De la ola revolucionaria a la ola reaccionaria: las dos r espuestas posibles a la crisis del capitalismo.....	3
La Unión Europea ante la ola reaccionaria	6
El “There Is No Alternative” ha quedado superado: es tiempo del malmenorismo.....	9
Algunas cosas importantes han cambiado	10
Pues al final sí que se podía.....	12
La violencia política y mediática contra las transformaciones	14
Quién manda aquí: los verdaderos adversarios.....	17
La operación Sumar: los aprendizajes y la memoria	19
Del gobierno de coalición al gobierno de Sánchez.....	20
Nos tumbaron, pero nos volvimos a levantar: y ahora, ¿qué hacemos?.....	23
La batalla cultural: Podemos como espejo del poder y motor ideológico de la izquierda.....	25
Una izquierda orgullosa de serlo, autónoma y no intervenida por el PSOE para poder llevar a cabo transformaciones.....	26
Podemos, una herramienta de transformación en manos de la gente	28
Un programa valiente y con claridad ideológica: hacia la República.....	30

Cambiar lo que no podemos aceptar. La izquierda en pie.

V Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos

De la ola revolucionaria a la ola reaccionaria: las dos respuestas posibles a la crisis del capitalismo

La V Asamblea Ciudadana de Podemos se celebra en un contexto político, social y económico completamente diferente de aquel que promovió nuestro nacimiento. Si en el 2014 un movimiento ciudadano cuyo corazón palpitaba tres años antes en la Puerta del Sol se había extendido a lo largo y ancho de las plazas de todo el mundo, hoy una ola reaccionaria recorre el planeta. Es reaccionaria —además— en el sentido literal de la palabra, ya que tiende a oponerse a cualquier innovación, a cualquier avance en derechos y mejora en la vida de las personas. Este proceso de involución cuenta con importantes exponentes, representantes simbólicos en todo el mundo que han ido evolucionando hasta prácticamente el esperpento, como el recientemente reelegido presidente estadounidense Donald Trump, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o la presidenta de la Comunidad de Madrid en España, Isabel Díaz Ayuso. Personajes que, bajo su apariencia incompetente, esconden una enorme capacidad comunicativa porque cuentan, por un lado, con potentísimos altavoces mediáticos que reproducen sus mensajes y, por otro lado, repiten consignas sencillas que refuerzan los valores más individualistas e insolidarios ya presentes en nuestras sociedades, profundamente neoliberales de por sí. El “se iban a morir igual” con el que Ayuso ha respondido a las exigencias de verdad, justicia y reparación por las 7.291 personas a las que dejó morir sin asistencia médica en las residencias de Madrid resume bien de qué estamos hablando. La ola reaccionaria quiere evitar que el feminismo, el ecologismo, el antirracismo, la justicia social y la Paz que cada vez más gente viene defendiendo se abran paso en España, en Europa y en el mundo. En los últimos años, los reaccionarios han obtenido importantes victorias y, quizás, la mayor de ellas haya sido conseguir que la Unión Europea se encamine hacia un régimen de guerra, desviando ingentes cantidades de recursos públicos del estado social o la transición energética a la industria del asesinato de personas y la destrucción de ciudades y países.

En un contexto más amplio, hay que entender la llegada de esta ola reaccionaria como la segunda respuesta a las innumerables crisis que ha abierto el sistema capitalista.

Como razona Nancy Fraser, el sistema del capitalismo neoliberal es un sistema caníbal. Esto es, un sistema cuyo funcionamiento devora las propias condiciones de posibilidad que lo hicieron materialmente viable en un primer momento y va creando progresivamente crisis estructurales y profundas: la crisis de cuidados y de sostenibilidad de la vida (cuya condición de trabajo invisible, no reconocido, no remunerado y llevado a cabo en su inmensa mayoría por mujeres es indispensable para que el resto del sistema pueda mover la rueda de producción infinita a un coste mucho más bajo), la crisis medioambiental y la emergencia climática (el agotamiento de los recursos primarios que siempre fueron finitos aunque el sistema tuviera que mantener la ficción del crecimiento sin límites), la crisis de dominación imperialista, colonial y de expolio (el colapso de la división mundial entre países extractores y países expoliados con la intensificación de los flujos migratorios y la correspondiente reacción xenófoba) o la crisis de la democracia institucional (que, tras décadas de ser pervertida en favor de los privilegios políticos, económicos y fiscales de los grandes oligarcas capitalistas, ya no es capaz de garantizar los derechos frente a los negocios). En los últimos meses, la crisis de la rentabilidad de capital industrial sumada a la crisis de la hegemonía planetaria de los Estados Unidos de América ha dado paso a una nueva estrategia capitalista que pasa por una suerte de keynesianismo de guerra (en su apropiación sin límites de los recursos productivos en los diferentes países, el capital se ha quedado corto de oportunidades de negocio y el giro en la política exterior de Donald Trump ha servido como excusa perfecta para orientar el trasatlántico europeo hacia la industria armamentística, con lo que ello supone de ataque directo a la misma continuidad de la vida humana).

Podríamos decir que la primera respuesta que aparece ante los signos cada vez más evidentes de la crisis orgánica del sistema capitalista neoliberal es la respuesta revolucionaria, plebeya, democrática y desde abajo que recorre el mundo desde las primaveras árabes a Occupy Wall Street pasando por el 15M español y la aparición de Podemos. En este primer movimiento, se plantea que la solución a la crisis tiene que pasar por el feminismo (fin de las violencias contra las mujeres, derechos iguales para todas, incluyendo a las personas LGTBIQ+, y redistribución y reconocimiento del trabajo de los cuidados), la justicia social (fin de los privilegios económicos, políticos y fiscales de los multimillonarios y garantía de las bases materiales mínimas para que todas las personas puedan llevar una vida digna), el cuidado del planeta como única forma de que la humanidad pueda tener un futuro, el antirracismo y el internacionalismo de las luchas emancipadoras, la fraternidad entre los pueblos y el fin del expolio imperialista o la democratización profunda de todos los poderes realmente existentes (el político, pero también el militar, el policial, el judicial y el mediático) como única forma de recuperar una institucionalidad que sea capaz de proteger a las mayorías.

Aunque es evidente que los elementos reaccionarios nunca han desaparecido de la historia, sí podemos afirmar que, durante esta primera ola revolucionaria, se encontraron acorralados y —al menos en un primer momento— optaron por quedarse quietos, agazapados. Sin embargo, y gracias a los enormes recursos materiales de los que disponen, así como al control mayoritario de las diferentes estructuras del Estado en la mayoría de los países, rápidamente se recompusieron y fueron capaces de articular con enorme violencia la ola reaccionaria que vendría, al mismo tiempo, a responder a la ola revolucionaria previa, pero también a la crisis del capitalismo. Cuando el poder establecido ve peligrar sus privilegios, siempre encuentra en el fascismo el mejor aliado para intentar defenderlos. Hoy vemos

cómo existe en nuestro país, a consecuencia de ello, un claro retroceso en valores democráticos, de igualdad o respeto a la diversidad. Mediante fakenews difundidas masivamente, combinado con la promoción de 'influencers' que ofrecen un mensaje de retroceso patriarcal y dulcificación (o negación) del pasado, mimados y protegidos por el poder, logran atraer hacia sus posiciones a un segmento de las clases populares. Lo hacen apelando a la frustración y al miedo que sufren las personas ante esa falta de horizonte de futuro, y la pérdida de sentido y de seguridad existencial que ello provoca.

Los operadores de la respuesta reaccionaria en ningún momento ocultan su objetivo de superar el actual sistema. Lo que ocurre es que su propuesta de superación va en la dirección exactamente contraria a la que articularon los movimientos populares durante los primeros años que siguieron al colapso financiero de 2008. Esta respuesta, esta «solución» a la crisis orgánica del sistema capitalista que plantean los reaccionarios es una propuesta autoritaria y depredadora encabezada por los súper ricos a nivel internacional. El mejor ejemplo es Donald Trump en los Estados Unidos y su corte de oligarcas multimillonarios de Silicon Valley. Su propuesta es la de un mundo sin reglas donde puedes invadir Groenlandia, conquistar militarmente el canal de Panamá, anexionarte Canadá, llevar a cabo un genocidio y una limpieza étnica en la Franja de Gaza, intervenir en la política de los países europeos mediante el control de Internet y de las redes sociales o reventar para siempre las reglas hasta ahora vigentes del comercio internacional con aranceles desorbitados. Su propuesta es imponer la ley del más fuerte, sustituyendo los derechos laborales por robots e inteligencia artificial, desmantelando los servicios públicos para mercantilizarlo todo y situando en la cúspide del poder a multimillonarios con rasgos sociopáticos que invierten miles de millones en la búsqueda de la vida eterna o en la exploración espacial como vía de escape si la Tierra se vuelve, eventualmente, inhabitable. Una propuesta de un mundo cruel e inhumano en el que la única salida es individual, en el que lo único a lo que podemos aspirar es al sálvese quien pueda y en el que pisar el cuello de tu vecina para salvarte individualmente no solo sea tu única opción sino que además esté plenamente justificado.

Los reaccionarios tratan de enfrentar al penúltimo contra el último, y frente a ello, nosotras debemos señalar al enemigo real para poner en el centro del tablero político las dicotomías sociales de "oprimidxs vs privilegiados", "élites vs clase trabajadora", etc. Al avance del fascismo se le combate y se le frena, como hiciera el 15M durante años, señalando y focalizando la lucha social contra los verdaderos enemigos de la sociedad, contra los verdaderos culpables de la situación de precariedad y degradación existencial existente en la vida de muchas personas, así como con políticas claras y pedagógicas que sean capaces de generar más avances sociales, más derechos, más igualdad y una sociedad más segura, acogedora e inclusiva para todos, todas y todes.

Esta ola reaccionaria se enmarca, además, en un contexto geopolítico enormemente complejo en el que la hegemonía norteamericana, que ha sido prácticamente

incuestionable desde la caída del muro de Berlín, se resquebraja sin acabar de caer. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Hoy la economía China ya compite de tú a tú con la economía norteamericana y China lleva mucho tiempo generando un espacio de influencia económica cada vez mayor que, a diferencia del imperialismo norteamericano, no parece aspirar al colonialismo cultural de sus aliados. En ese espacio en el que el viejo hegemon pierde su dominio total pero todavía no existe una alternativa clara, nacen los monstruos del conocido aforismo: la guerra de Ucrania, incluida la destrucción por parte de aliados de una infraestructura estratégica alemana, el genocidio en Palestina por parte de un Estado terrorista como es el israelí o una extrema derecha a la que nadie quiere ponerle el cascabel, desacomplejada y violenta. Los últimos acontecimientos conocidos, a la sazón la propuesta de finalización de la guerra de Ucrania hecha por Trump, que se fundamenta básicamente en que Europa asuma las consecuencias de una guerra que no generó; y la aparición de una IA china de código libre, mucho más barata que toda la tecnología norteamericana puesta en marcha hasta el momento, son dos buenos ejemplos que ilustran lo que pretendemos explicar.

No podemos olvidar, por último, que los países de América Latina, particularmente Colombia y México, están fortaleciendo sus procesos de democratización y no aceptan ya más intervenciones europeas y norteamericanas que sólo pueden ser calificadas de neocolonialismo. Quién hubiera imaginado hace una década un gobierno mexicano encabezado por una mujer y negándole la invitación a su toma de posesión al rey de España por no responder a una carta en la que se le reclamaba una petición de perdón, una reparación moral por los crímenes cometidos en su tierra bajo la invasión y el saqueo español. En esa estela democratizadora y decolonial podemos enmarcar también otros procesos como los que han dado lugar al nuevo gobierno de Senegal, el primero progresista de su historia, y que es importante seguir con atención.

La ola reaccionaria que estamos viviendo en estos años y que es completamente diferente a la ola revolucionaria que nos vio nacer produce un entendible miedo en amplísimas capas de la población. Pero nosotras pensamos que podemos ganar. Aunque ellos tengan muchísimo poder, las fuerzas democráticas somos más y el futuro no está escrito si nos atrevemos a pelear. Nosotras, hoy más que nunca, recordamos las palabras del presidente Allende, la historia es nuestra y la escriben los pueblos.

La Unión Europea ante la ola reaccionaria

Las cosas están cambiando y Europa se está quedando atrás a través de elegir, una y otra vez y de forma sistemática, la opción del mal menor que solamente sirve para contener el peligro durante un breve espacio de tiempo a la vez que alimenta la potencia política de los reaccionarios. La decisión estratégica europea de adoptar una posición, primero, subalterna a los Estados Unidos y, ahora, embarcada en una terrorífica escalada bélica como respuesta a la 'traición' del gigante norteamericano, está haciendo que el proyecto europeo se vea seriamente comprometido y

hoy Europa —secuestrada por sus élites— es rehén de la profunda contradicción que existe entre lo que hace y lo que dice. Mientras Israel bombardeaba el Líbano, el entonces máximo representante de la diplomacia europea, el socialista Josep Borrell, hablaba con la resignación de alguien que no tuviera absolutamente ningún poder: “Nadie parece poder frenar a Netanyahu”, decía una de las personas que supuestamente tendría que hacerlo.

El mercado común más grande del mundo ha optado por el peor de los dos caminos que tenía disponibles. La Unión Europea, ante las aventuras bélicas de los Estados Unidos, podría haber apostado por ser una fuerza de paz en el mundo. Esto no es solamente algo moralmente deseable sino también estratégicamente recomendable para un actor geopolítico con escasa potencia militar pero gran fuerza industrial y comercial. En un mundo en guerra, ganan los que tienen poderosos ejércitos. En un mundo en paz, pueden prosperar aquellos que se dedican a trabajar, a innovar, a cuidar, a producir o a vender sus productos. Por poner un ejemplo fácil de entender, casi el 15% del PIB español proviene del turismo. ¿Qué le ocurriría al turismo en un planeta en guerra? ¿Qué le ocurriría a nuestra economía? Sin embargo, en vez de optar por el camino de la paz y de los derechos humanos, las élites actuales de la Unión Europea han elegido la senda dictada por la OTAN de destinar ingentes cantidades de recursos públicos al aumento del gasto en armamento, detrayendo así, obviamente, esas mismas cantidades de los servicios públicos y la protección social. Porque cada euro que destinamos a armas y tanques es un euro que no destinamos a médicas y profesores. En una carrera a ninguna parte —ya que es imposible que la Unión Europea pueda llegar a ser equiparable militarmente a las grandes potencias mundiales en el corto plazo—, las élites del continente han decidido regalar billones de euros a la industria armamentística norteamericana y, de paso, contribuir a la inestabilidad mundial y la violencia. Si el seguidismo a los Estados Unidos ya tenía un gravísimas contraindicaciones antes de las últimas elecciones de aquel país, con la llegada de Donald Trump al Gobierno, el carácter suicida de la nueva estrategia de rearme a toda costa —al tiempo que se permanece dentro de la OTAN, bajo el mando militar de Trump— resulta ya imposible de negar para cualquier analista mínimamente honesto.

Lo más preocupante de la situación es, además, que aquellos partidos que —en principio— deberían suponer algún tipo de freno ante las escaladas bélicas —la familia socialdemócrata o los así llamados “verdes”— han doblado completamente la cerviz ante el aplastante bombardeo mediático otanista y han asumido una posición a favor sin matices del régimen de guerra que es indistinguible de la posición de la derecha y la extrema derecha. Tanto en España como en el conjunto de Europa, solamente una parte de la izquierda ha decidido hablar claro —aunque esto suponga recibir la máxima de las violencias políticas y mediáticas— y decir “no en nuestro nombre”. Podemos pertenece orgullosamente a ese club de la resistencia en que se encuentran también Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn o el Bloco de Esquerda y, por ello, que hayamos sido capaces de volver a poner en pie esa izquierda en las últimas elecciones europeas es algo que va mucho más allá de nosotras y que proporciona una pequeña luz de esperanza en nuestro continente. Que seamos capaces de seguir haciendo crecer ese proyecto político que ya está en pie, con firmeza y con una brújula ideológica clara, es condición de posibilidad para que pueda existir una fuerza social e institucional que sea capaz

de torcer el brazo a los asesinos sionistas y poner fin al genocidio en la Franja de Gaza —como paso previo a acabar para siempre con la ocupación de Palestina y el apartheid de sus gentes— o de impedir que se reduzca drásticamente la inversión social para entregar miles de millones de euros al complejo industrial-militar de los Estados Unidos (y en menor medida a los señores de la guerra de nuestro continente).

En este nuevo ciclo es vital, no solamente para España, sino también para el conjunto de Europa, que ganen fuerza los movimientos populares y las opciones políticas que, frente al régimen de guerra, apostamos por la paz, la defensa de los derechos humanos y de la vida, el feminismo y los cuidados o la protección de la casa común, toda vez que no existe un planeta B. Si no queremos seguir caminando con paso firme hacia la catástrofe civilizatoria, es importante que tomemos las riendas de los destinos de nuestros pueblos quienes apostamos por establecer alianzas con aquellos países hermanos que entienden que estas y no otras son las tareas de la humanidad. Es importante hacerse cargo también de que la pérdida de hegemonía mundial de Estados Unidos ha conducido a un florecimiento de una escena internacional multipolar en la cual más de la mitad del mundo no acepta ya las órdenes del gigante norteamericano, aunque Europa siga persistiendo en el error y siga acatando las órdenes de Donald Trump (el aumento exponencial en el gasto militar se nos intenta vender como una decisión autónoma europea, pero eso es exactamente lo que exigió una y otra vez el presidente de los Estados Unidos).

Del mismo modo, es indispensable que exista una izquierda europea fuerte para frenar y revertir la deriva hacia el racismo y la xenofobia ultraderechista que en estos momentos se ha apoderado de todas las instituciones de la Unión Europea. Necesitamos impulsar y consolidar un espacio de izquierda transformadora a nivel europeo, antifascista, anti-imperialista y anti-militarista, escrupulosamente democrático en el sentido más amplio e integrador de la palabra, que sea capaz de plantarle cara tanto al consenso bélico, austericida, racista e imperialista de las actuales autoridades de la UE y las familias ideológicas que las conforman, como a la internacional reaccionaria que ahora avanza a gran velocidad de la mano del liderazgo mundial del fascista de Donald Trump. Mediante la firma del último pacto migratorio, aplaudido por Giorgia Meloni, ha quedado escrito negro sobre blanco que no son solamente los fascistas europeos los que pretenden dejar morir a la gente en el Mediterráneo o enviar a las personas migrantes a campos de concentración en terceros países, sino el conjunto del establishment del continente. Frente a unas élites que parecen haber olvidado el horror xenófobo que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX en la península europea, nosotras sí tenemos memoria, nosotras sí defendemos los derechos humanos de todas las personas y nosotras sí decimos que ningún ser humano es ilegal.

El “There Is No Alternative” ha quedado superado: es tiempo del malmenorismo

Durante la crisis financiera de 2008 se nos dijo que no había alternativa al austericidio neoliberal y entonces las políticas económicas de destrucción de los servicios públicos y los derechos laborales de José Luis Rodríguez Zapatero —en su segunda legislatura— y de Mariano Rajoy se volvieron indistinguibles. Votar al PSOE en España se convirtió en una apuesta por el mal menor que no cambiaba nada y que obligaba a ir al colegio electoral el domingo de las elecciones con una pinza en la nariz. Hasta que estalló el 15M, las personas progresistas y de izquierdas solamente tenían un motivo —resignado y gris— para ir a votar: “el PP es todavía peor”.

Hace algo más de una década, fue el consenso neoliberal lo que hizo que se cayeran las máscaras del juego del reparto de papeles simbólicos del sistema bipartidista del turno que el régimen del 78 logró consolidar en nuestro país a principios de la década de los 80 del siglo pasado. Hoy, es el consenso sobre el régimen de guerra, sobre la política de vivienda y también sobre el racismo institucional contra las personas migrantes el que vuelve a revelar que prácticamente no hay ninguna diferencia entre el PSOE y el PP —o sus homólogos europeos— cuando ambos vuelven a entonar el antiguo lema abreviado como TINA, “There Is No Alternative”, esta vez como una reivindicación del antiguo bloque central como única forma de frenar el avance de la extrema derecha. Después de mucho camino andado y después de demostrar que sí se pueden cambiar algunas cosas cuando la izquierda transformadora accede a posiciones de poder institucional —aunque sean modestas—, es nuestra obligación demostrar definitivamente que la alternativa existe y construirla con nuestros cuerpos y nuestras manos.

Y es nuestra obligación hacerlo porque ese bloque central que defendía «lo que hay» como la única opción posible, esa alianza entre conservadores y progresistas para mantener el status quo ante el avance de las izquierdas transformadoras, ha acabado de estallar por los aires 10 años después al haberse consolidado con una enorme fuerza el movimiento mundial reaccionario que, lejos de pretender mantener lo que hay, quiere cambiarlo por completo pero en la dirección contraria. Como si de una revolución oscura se tratase, los nuevos inquilinos de la Casa Blanca y sus aliados internacionales aceptan la premisa de que la alternativa existe, pero es la suya la que quieren implementar: la del odio, la violencia del último contra el penúltimo, el poder absoluto del capital, el expansionismo imperialista y la destrucción del ecosistema. El “There Is No Alternative” ha muerto porque la batalla fundamental de nuestro tiempo no es ya entre los que quieren que todo se queden como está y las que queremos construir un mundo mejor. Ahora la batalla es entre nosotras y los ejércitos de la reacción.

De hecho, los viejos partidos de la derecha conservadora y de la socialdemocracia ya no se atreven a decir que «no hay alternativa», porque resulta evidente que los reaccionarios están proponiendo una y podrían tener la fuerza de llevarla a cabo. A lo que apelan ahora las antiguas fuerzas del statu quo es al mal menor. En España, en concreto, el PSOE lleva ya aproximadamente desde 2018 desplegando con fuerza el argumentario malmenorista como principal lema de campaña e indicación de voto. «Nosotros no te vamos a resolver los problemas materiales, nosotros no vamos a tocar ni un pelo los privilegios de los multimillonarios, nosotros no vamos a hacer nada fundamentalmente distinto de la derecha respecto de la guerra en Ucrania, del genocidio en Gaza, del aumento exponencial en el gasto armamentístico, de la política de vivienda, de la «mano dura» contra las personas migrantes o de la regeneración democrática de los poderes militar, policial, judicial y mediático», nos vienen a decir Pedro Sánchez y los suyos. «Pero me tienes que votar para que no gobierne Feijóo con Abascal porque, por lo menos, yo no soy ellos.» El malmenorismo puede definirse como la tendencia persistente que adoptan los autodenominados partidos progresistas a justificar la conveniencia de sus posiciones conservadoras o de escasa ambición política con la coartada de evitar la llegada al poder de la derecha. Por tanto, el malmenorismo conlleva la renuncia programática y discursiva a las convicciones de izquierdas y representa una falsa alternativa al proyecto de las élites. El problema de esta combinación —a veces más explícita y a veces más implícita— del llamamiento al miedo a la extrema derecha y la apelación a elegir el mal menor es que acaba consiguiendo precisamente lo que dice querer evitar. Si en algún lugar del mundo se ha comprobado está dinámica con contundente claridad ha sido en los Estados Unidos, donde un Joe Biden primero y una Kamala Harris después no han planteado prácticamente ninguna diferencia programática con Donald Trump y simplemente se han limitado a repetir que Trump es muy malo y que ellos no son Trump y eso ha conducido —de forma inevitable y absolutamente previsible— a una contundente victoria del agresor sexual convicto.

El malmenorismo, en su esencia, fomenta la desmovilización ciudadana al limitar las alternativas democráticas. La estrategia del mal menor suprime la ambición política para abordar problemas estructurales y llevar a cabo verdaderas transformaciones. La renuncia a las propuestas transformadoras conduce al triunfo del mal que se pretende evitar, contribuyendo a allanar el camino a la extrema derecha.

Si hace una década, el discurso del “There Is No Alternative” sirvió al mismo tiempo para intentar frenar el avance de la izquierda transformadora y para dar combustible al avance de la extrema derecha, hoy el malmenorismo sirve para exactamente lo mismo. Y ahora como entonces, la forma de romper el nudo gordiano sigue siendo también la misma. Como dijo Irene Montero, «a estos fascistas se los para con más derechos». Algo que ni el PSOE ni sus partidos satélite están dispuestos a hacer —porque eso implica enfrentarse al poder económico y mediático— y que solamente tendremos una mínima posibilidad de conseguir si existe una fuerza como Podemos.

Algunas cosas importantes han cambiado

Obviamente, muchas cosas han cambiado en esta última década. A diferencia de lo que ocurría hace algo más de 10 años, cuando la extrema derecha y el fascismo se encontraban agazapados en el interior de los partidos de la derecha tradicional, el brutal bombardeo mediático que se ha ejercido a lo largo de estos años para demonizar al feminismo, al ecologismo, al independentismo —en España— y también a la izquierda, no solamente ha servido para intentar frenar la acción de todos estos movimientos políticos y sociales. Además, al sembrar los campos ideológicos con violentos mensajes de odio y difamación contra sus postulados, lo que ha conseguido el antiguo establishment bipartidista es que las ideas de extrema derecha florezcan por todas partes a la espera de que alguien —simplemente— las quiera cosechar. Esta deriva, que, en España, se hace cristalina y elocuente en el tránsito y la sucesión que va desde UPyD a Ciudadanos a VOX y, ahora, a Alvisé, no es obviamente idiosincrática de nuestro país, sino que se está produciendo —con diferentes intensidades— en prácticamente todos los países del mundo.

La existencia de un fascismo institucional, que ha ido creciendo a la par que los mensajes de extrema derecha en los medios de comunicación masiva y que la proliferación de los “jueces activistas” con los que comparten ideología y operaciones, son todos ellos elementos que estaban todavía durmientes hace algo más de 10 años cuando nació Podemos. Esa es una de las cosas que han cambiado. Los avances sociales, políticos, feministas y ecologistas han producido una brutal reacción por parte de los poderes fácticos y esto ha resucitado a los monstruos del pasado, eso sí, adaptados al presente.

Tras estos diez años de avance del proceso de transformación social y política en España que ha cabalgado sobre el 15M, el 8M y las mareas de pensionistas y por los servicios públicos, la derecha ha demostrado con mayor claridad que nunca que dispone de cuatro patas muy bien articuladas y, de las cuales, la política no es ni de lejos la más importante. Obviamente el PP y VOX representan la cara visible, institucional, de la derecha en España, pero quienes han sido realmente determinantes en intentar frenar los avances sociales y feministas que Podemos ha impulsado desde el gobierno de la mano de los movimientos sociales, han sido la derecha judicial y la derecha mediática. Al mismo tiempo, pensamos que es importante explicar que la derecha cuenta también con un brazo militarizado que actúa violentamente contra los colectivos señalados por la derecha política. Estamos hablando de los comandos neonazis como Desokupa, que cada vez tienen más fuerza y visibilidad, puesto que hacen lo que sus políticos no se atreven a hacer. Primero fueron a por las personas en situación más vulnerable que no tienen un techo para su familia, después a por activistas y a por la gente de Podemos, pero mañana irán a por cualquiera.

Pues al final sí que se podía

Otra de las cosas que han cambiado en esta década —y no debemos olvidarlo— es que el “sí se puede” ha pasado de ser una hipótesis a ser un hecho comprobado. Durante los primeros años de vida de nuestra fuerza política, nosotras enunciamos algo que veíamos como una evidencia: que no está escrito en ninguna parte que las cosas no se puedan cambiar; que, si la mayor parte de la gente de nuestro país es gente decente, debería ser posible eliminar los obstáculos artificiales que impiden a esa mayoría democrática expresarse en las urnas y alcanzar el poder; y que eso debería permitir, mediante la acción política e institucional, y de la mano de los movimientos sociales, reformar a fondo el sistema económico del país para conseguir que todo el mundo que habita en él pueda tener sus necesidades materiales básicas cubiertas y la posibilidad —al menos la posibilidad— de un proyecto de vida. Ese es el núcleo de nuestra ideología y eso es lo que expresan las palabras que inauguró ya hace unos años Irene Montero: “Querer para las personas que no conocemos de nada lo mismo que queremos para las personas que más amamos: una vida digna y feliz”. Eso es Podemos y el “sí se puede” fue el canto de batalla que entonamos en la primera época para dejar claro a todo el mundo que nos quisiera escuchar que no pensábamos resignarnos y que no pensábamos dejar de pelear por ese horizonte.

Pero, al principio, el “sí se puede” era tan solo —o nada menos que— una firme convicción que todavía había que demostrar.

Sin embargo, todo cambió el 10 de noviembre de 2019, cuando, el resultado de la repetición electoral a la que el PSOE nos había empujado mediante una negociación de gobierno fake que solamente pretendía subalternizar a Podemos por la vía de la presión mediática eliminó de la ecuación al hasta entonces socio prioritario de Pedro Sánchez, el partido neoliberal Ciudadanos, y no dejó más opción a los socialistas que aceptar la ruptura de la cláusula de exclusión histórica que había mantenido durante más de 80 años fuera del ejecutivo español a las personas de nuestra tradición política. Pero la formación del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia en España no solamente fue quizás el hito político más importante conseguido por nuestra formación en toda su historia sino que, además, abrió la puerta a demostrar el “sí se puede” con leyes y con acción gubernamental. Y vaya si lo demostramos.

En tan solo tres años y medio y en medio de las convulsiones globales producidas por la peor pandemia del último siglo y la primera guerra en suelo europeo del siglo XXI, nuestra presencia en el Consejo de Ministros y nuestra voluntad inquebrantable de dar la batalla por la transformación y por los derechos de la gente en todos los espacios —con una táctica que nuestros adversarios tanto de la derecha como de la progresía calificaron durante años como “ruido” para intentar demonizarla pero que incluso el propio Pedro Sánchez ha llegado a reivindicar para sí recientemente— consiguió implementar reformas en un número y en una profundidad que ninguna legislatura anterior había visto. Hicimos mucho menos

de lo que nos hubiera gustado hacer; el PSOE trabajó duramente para frenar y limitar todos los avances, eso es cierto. Pero, al mismo tiempo, hicimos más de lo que nunca se había hecho hasta entonces desde el gobierno de España. No cabe en este documento una lista completa de los logros del gobierno de coalición, pero baste mencionar la puesta en pie de toda una nueva generación de derechos feministas y LGTBIQ+ con la nueva Ley del Aborto, la Ley Trans, el Pacto de Estado contra las violencias machistas o la Ley solo Sí es Sí —aplaudida en el extranjero al mismo tiempo que demonizada en España por la operativa conjunta de los jueces reaccionarios, el PP y el PSOE y sus medios de comunicación afines—, la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional desde que existe tal cosa, la primera ayuda para autónomos por cese de actividad, la derogación del mal llamado factor de sostenibilidad de las pensiones y su revalorización por ley con el IPC, la primera Ley de Vivienda de la democracia, las primeras leyes de protección animal también en todo nuestro periodo democrático, la legalización de la eutanasia, la derogación de la Ley Berlusconi aprobada por el PP para garantizar la impunidad de su corrupción, la implementación por primera vez de una limitación a los beneficios caídos del cielo de las grandes eléctricas mediante el tope al gas, la implantación por primera vez en España de un Ingreso Mínimo Vital, la aprobación de impuestos a las grandes empresas tecnológicas, a las transacciones financieras o a las grandes fortunas, la Ley de Cadena Alimentaria con el establecimiento de la prohibición de la venta pérdidas para proteger a nuestro sector primario, la Ley de Cambio Climático, la multiplicación por tres del presupuesto estatal en dependencia o la aprobación de tres Presupuestos Generales del Estado consecutivos, todos ellos en tiempo y forma y cada uno de ellos el más expansivo de la historia de España hasta entonces.

El “sí se puede” es la frase que condensa la cultura política de Podemos y el proceso de empoderamiento, transformación social y política que hemos acompañado en esta década en España. En estos años millones de personas que o bien no votaban, o bien votaban resignadamente al PSOE se han dado cuenta de que las cosas pueden ser diferentes si peleamos juntas y unidas, que no hace falta aceptar “el mal menor”. Este aprendizaje colectivo es crucial, habida cuenta de que la izquierda española es —a diferencia de lo que ocurre en otros países y latitudes— heredera de una fortísima cultura de derrota. La gente que pensaba como nosotras acabó tras su mayor experiencia de éxito —el gobierno de la segunda república— en una cuneta o en el exilio. La transición también supuso en los años 70 del pasado siglo una derrota gravísima para la izquierda, puesto que el PSOE capitalizó toda la lucha antifranquista y por los derechos sociales, económicos y feministas que había impulsado el PCE. Muchas de nosotras y nosotros, como militantes, hemos crecido en esa cultura de la derrota. Lo que dice esa cultura es básicamente que la gente que piensa como nosotras no tiene derecho a tener poder en España, a hacer realidad sus ideas. Eso es lo que cambia para siempre Podemos y eso es lo que buscan destruir por todos los medios a su alcance el PSOE y la operación Sumar. “Volved al rincón”, nos dicen. Pero nosotras ya sabemos que cambiar las cosas es posible, que una ministra feminista y de izquierdas puede ser la mejor ministra de Igualdad de la historia de nuestro país, que cuando peleamos de la mano, las cosas pueden ser mejores para la gente trabajadora de nuestro país, la que no llega a fin de mes, ni puede pagar el alquiler. Por eso, nuestra principal tarea política y el motivo por el cual Ione Belarra, Irene Montero y el conjunto de la dirección actual de Podemos decidimos jugarlo todo a las europeas de 2024 es que debemos proteger esa cultura política por

encima de todo, por encima de nosotras mismas también. Incluso si perdemos, quienes vengan tras nosotras deben saber que, con suficiente gente peleando al lado, siempre se pudo, se puede y se podrá.

Nunca debemos olvidar, además, que nuestras victorias están en constante disputa, y por eso nuestra tarea ahora es garantizar la implementación de los últimos avances, no dar ni un paso atrás en derechos conquistados y, lo más importante, ampliarlos. Porque no hemos ido demasiado lejos: esto no ha hecho más que empezar.

La violencia política y mediática contra las transformaciones

El gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos con Pablo Iglesias como vicepresidente y la construcción del bloque de dirección de Estado conformado con las fuerzas nacionalistas de izquierdas en el parlamento ha supuesto —hoy es un hecho ya— el mayor momento de avance en derechos para nuestro país de la historia democrática reciente. No nos cuesta reconocer, no obstante, que no hemos llegado —ni de lejos— a donde nos gustaría, pero la realidad es la que es. Frente a esos avances, la reacción política, mediática y judicial de la derecha ha sido enormemente violenta demostrando, una vez más, que la derecha española no es democrática. Sólo hacen parecer que respetan las reglas del juego cuando ganan. Y decimos “hacen parecer” porque no olvidamos la salvaje guerra sucia judicial-mediática que se viene desplegando contra Podemos, contra los partidos independentistas y contra activistas y militantes de izquierdas que aspiran a construir un país más justo o que se reconozca el derecho a decidir de los pueblos.

Hoy el uso del término “lawfare” se ha generalizado, pero conviene no olvidar el daño reputacional que se ha hecho a las fuerzas políticas y sociales transformadoras a través de falsos casos judiciales que luego quedan en nada. En pleno siglo XXI, los golpes a la democracia ya no se dan —al menos por el momento en Europa— sacando los tanques y el ejército a la calle. Ahora se utiliza la guerra judicial y mediática como herramienta para desprestigiar a todo aquel que defiende el avance en derechos. No podemos olvidar cómo la mal llamada policía patriótica, bajo las órdenes del gobierno de Mariano Rajoy, y los jueces reaccionarios afines al PP —como García Castellón o Escalonilla— persiguieron a los adversarios políticos de la derecha, a activistas y movimientos sociales y protegieron a sus corruptos. En Podemos sabemos bien el daño irreparable que produce el lawfare y la criminalización pero también lo saben los 6 de Zaragoza, las 6 de la Suiza, los activistas ecologistas y del movimiento por el derecho a la vivienda digna, quienes denuncian el genocidio contra el pueblo palestino o los grupos anarquistas.

Frente al avance de Podemos y particularmente frente a la articulación de este bloque de poder progresista y plurinacional, la derecha no tardó en rearmarse para frenar los avances, como llevan haciendo desde hace 150 años, contra

los procesos democráticos republicanos, particularmente contra la segunda república. Primero fueron a por el vicepresidente Iglesias y a por la ministra Montero. Las imágenes de fascistas violentos y agresivos en la puerta de su casa, hogar en el que viven tres niños pequeños, día tras día durante meses, sin que el PSOE moviera un dedo para evitarlo, dan buena cuenta de la violencia brutal que se ha permitido y alentado contra Podemos. Es posible que el PSOE pensara en aquel momento que, como una de las dos patas del bipartidismo, jamás les pasaría a ellos y podrían seguir sacando rédito electoral del ataque a Podemos. Parece que se equivocaban y hoy al PSOE le empieza tocar una pequeña parte de lo que tanta gente lleva años sufriendo en nuestro país.

Después, se produjo la mayor ofensiva judicial reaccionaria contra el feminismo y contra Podemos, concentrada en la persona de Irene Montero. Para quien no lo recuerde, las cosas sucedieron así. Después de la aprobación de la Ley Solo Sí es Sí, las rebajas en las penas de algunos agresores sexuales por parte de jueces con sesgos machistas se venían produciendo desde hacía tiempo, con escasa repercusión. El sesgo patriarcal en la justicia española no tenía nada de novedoso, al fin y al cabo. Pero ocurre algo que obliga al PSOE a cambiar el plan. En la época a la que nos referimos, Yolanda Díaz ya había lanzado Sumar y esto es importante tenerlo en cuenta.

El 23 de noviembre de 2022, la diputada de VOX Carla Toscano carga en el Congreso contra Irene Montero y ejerce una brutal violencia política sobre ella diciéndole que “lo único que ha estudiado en profundidad es a Pablo Iglesias”. En ese momento toda la bancada de la mayoría progresista hierve y arropa a la ministra. Irene hace una intervención histórica bajo el aplauso de todos los diputados y diputadas progresistas donde afirma que “les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas”. La foto de Dani Gago con Irene Montero señalando con el dedo la bancada de VOX queda para la historia. El 26 de noviembre, sábado, Podemos organiza un acto contra la violencia política que sufren las mujeres que se atreven a dar un paso al frente y defender sus derechos. Yolanda Díaz no participa en él. Pocos días después, Enric Juliana escribiría que así es como se construye una candidata en un fin de semana. Y es precisamente a partir de ese momento cuando el PSOE y la progresía mediática, atemorizados ante la posibilidad de que les saliera mal la operación Sumar, deciden mutilar el principal avance institucional del feminismo —la Ley Solo Sí es Sí— para tratar de destruir política y personalmente a Irene Montero. La decisión estaba tomada. Lo demás es bien conocido, el PSOE acepta darle la mano al PP y reformar el Código Penal para volver hacia atrás y eliminar el consentimiento del centro del articulado, a pesar de que en privado reconocían que la ley no era el problema.

Pactaron con la derecha machista un retroceso en el mayor avance feminista de las últimas décadas —aplaudido y replicado fuera de nuestro país— solamente para intentar decapitar a la izquierda transformadora y garantizar la operación de sustitución por una versión domesticada, que no hace “ruido” y que se encuentra políticamente intervenida por el PSOE por la vía de aceptar sus límites y su dirección estratégica.

Con todo, lo sabíamos. Pelear por los mayores en derechos de la democracia reciente y demostrar que es bueno para nuestro país y para su gente que pasen cosas aunque el PSOE y la derecha no quieran, no le iba a salir gratis a Podemos. El PSOE, enormemente incómodo ante quienes hemos puesto ante el espejo de su propia hipocresía y falta de voluntad política una y otra vez, desplegó distintas estrategias para evitar que Podemos pudiera capitalizar su trabajo político.

Por un lado, trató de impedir por todos los medios internos a su alcance los avances que Podemos peleó. Jamás el PSOE durante todo el gobierno de coalición se dirigió a la parte morada del gobierno para proponernos una medida beneficiosa para la gente. Fue sólo enfrentándonos a sus propias contradicciones en el debate público como logramos que tuvieran que asumir medidas que rechazaban de plano como la Ley Trans o la regulación de precios del alquiler (que hoy siguen sin aplicar donde gobiernan). A ese debate público legítimo entorno al cumplimiento del acuerdo de gobierno lo llamaron vulgarmente “ruido”.

Contra nosotras se desplegó también toda la violencia de la progresía mediática con un discurso disciplinador —el del «ruido»— que tiene un carácter profundamente conservador y antipolítico. Como es evidente, las únicas clases sociales que pueden permitirse guardar silencio son las clases acomodadas e integradas. Aquellas personas que llegan fácilmente a fin de mes, que no ven nubes negras permanentemente en su horizonte material, que tienen una vivienda digna completamente garantizada, que cobran un salario muy por encima de la media, que se pueden permitir llevar a sus hijos a la universidad —incluso mantenerlos sin trabajar durante largas oposiciones—, ir de vacaciones a destinos lejanos, cambiar el coche cada pocos años y no tener miedo a la enfermedad porque lo que no cubra la sanidad pública siempre lo pueden pagar en la privada, esas personas, pueden permitirse el lujo de nunca levantar la voz (e incluso, a pesar de ello, muchas de ellas la levantan, no por la carestía que su propia familia no vive, sino por el sufrimiento de sus vecinos y vecinas).

Pero la gente de abajo, las clases populares y trabajadoras, los que cobran el salario mínimo o todavía menos, las familias con un gran dependiente a su cargo, los pequeños autónomos, esa gente no tiene otra opción que hacer “ruido”. Ruido son las huelgas que nos han traído derechos laborales, ruido es el movimiento feminista que hace retroceder al patriarcado, ruido son las mareas blanca y verde defendiendo nuestros servicios públicos, ruido es “no a la guerra”, las marchas de la dignidad y el 15M. Lo contrario del ruido es la muerte de la política, la derrota de la mayoría social, la suspensión de la democracia y el gobierno sin contrapeso alguno de las oligarquías. Cuando todos los cañones mediáticos afines al PSOE acusaban a Podemos, no solamente estaban intentando acabar con nuestro movimiento político sino también con la posibilidad misma de la transformación social.

Quién manda aquí: los verdaderos adversarios

Decía Pablo Iglesias hace un tiempo que cuando empezó a hacer política institucional nunca hubiera pensado que sus adversarios no estarían sentados en un escaño, sino en la judicatura, la policía o los consejos de administración de las grandes empresas. En estos años, hemos aprendido de forma encarnada —es decir, como se aprenden las cosas que nunca se olvidan— que en España los que mandan de verdad no están en el Congreso de los Diputados. En este momento, la élite económica patria, alumbrada al calor de los recursos que el franquismo le insufló a lo largo de cuatro décadas, convive con una élite económica internacional que no encuentra fronteras a su paso y percibe los distintos países como nichos de negocio a explotar. En el primer grupo encontramos a representantes como Florentino Pérez, Isidre Fainé, la casa de Alba, Juan Roig o el insigne Josu Jon Imaz. En el segundo grupo reina sobre los demás el fondo buitre BlackRock, que sólo en España tiene inversiones significativas en 20 de las 35 empresas del IBEX35, muchas de ellas del mismo sector, lo que genera un funcionamiento monopolístico que a priori debería ser incompatible con el liberalismo económico con el que se llenan la boca. Recientemente el gobierno de Pedro Sánchez autorizó la entrada de BlackRock en Naturgy con un gigante 20% y celebró que el mayor fondo buitre del mundo vaya a “invertir” 60.000 millones de euros en el sector inmobiliario de nuestro país. Los fondos buitres como BlackRock o Blackstone y sus filiales ejercen un poder político cuasi dictatorial, asegurándose de que ningún gobierno, ni ninguna administración tomará decisión alguna contra sus intereses. Se han hecho con la energía, con la vivienda, con la banca, con la agricultura y la alimentación y ahora van a por nuestras pensiones.

A comienzos de año podíamos comprobar como en el año 2024 las grandes empresas españolas alcanzaron la cifra récord de 40.000 millones de euros en dividendos, dinero que va directamente a los bolsillos de los accionistas y que no contribuye en nada a la economía productiva de nuestro país. Esta cifra es posible, por un lado, porque las políticas económicas expansivas y de protección social desplegadas durante el gobierno de coalición con Podemos para afrontar la pandemia primero y las consecuencias de la guerra de Ucrania después han sido útiles para poner a la gente a cubierto en los peores momentos, haciendo crecer al mismo tiempo la economía. Sin embargo, las políticas económicas neoliberales del PSOE han promovido que la acumulación de riqueza vuelva a quedar en unas pocas manos, negándose a intervenir el mercado energético y eléctrico con mucha mayor contundencia, a intervenir el mercado inmobiliario o a limitar los márgenes de beneficios de las grandes empresas de alimentación, en un contexto de salvaje alza de precios de los productos básicos.

Durante la legislatura del gobierno de coalición PSOE-UP avanzamos en una reforma fiscal, todavía muy insuficiente, que empezara a equilibrar la balanza y a hacer que los ricos y grandes empresas empiecen a pagar en España lo que les corresponde. Sin embargo, apenas un año después de la conformación del nuevo gobierno hemos comprobado como el PSOE no tiene la más mínima intención de continuar por esa senda fiscal, salvo que se le obligue. El PSOE votó en contra del impuesto propuesto por Podemos para obligar a los bancos a que devuelvan a las

arcas públicas (para crear un fondo de compensación a las familias que no pueden pagar la hipoteca) la mitad de los beneficios absolutamente estratosféricos que han hecho estos años a consecuencia de la subida de tipos. Recientemente, conocíamos que, en 2024, han vuelto a batir su récord de beneficios.

Del mismo modo, en los últimos meses ha quedado claro que, sin un Podemos capaz todavía de volver de condicionar toda la política estatal, quien acaba mandando en el congreso son los intereses de las élites económicas de nuestro país. Precisamente de eso va todo el debate en torno al impuesto a las grandes empresas energéticas. A la luz de los últimos acontecimientos en Davos —con Pedro Sánchez celebrando entre risas con Josu Jon Imaz la caída del Real Decreto-ley— parece obvio que el PSOE hacía tiempo que había comprometido con Repsol eliminar el impuesto extraordinario a las empresas energéticas que Podemos logró en el gobierno. El PSOE utilizó a Junts como excusa para dejar caer un impuesto que nunca quiso, permitiendo que las principales responsables de la emergencia climática que vivimos se vayan de rositas, cuando deberían ser quienes asumieran el grueso del coste de adaptar nuestro país al cambio climático.

La apuesta del gobierno de Sánchez por el régimen de guerra es, quizás, el último ejemplo de su servicio a las élites y quizás el más profundo y el más obscuro. Todos hemos visto, en las últimas semanas, cómo subían de forma significativa las acciones de la empresa armamentística Indra cuando Sánchez se comprometió públicamente a aumentar la inversión en la industria de la guerra en 17.000 millones de euros cada año. Además de un gravísimo peligro para la seguridad de nuestra población, esta última decisión del PSOE es, sobre todo, un modelo de negocio consistente en entregarle ingentes cantidades de dinero público a determinadas empresas del IBEX 35. La operación, además, cuenta con la correspondiente cobertura área mediática, toda vez que el máximo accionista del grupo Prisa, el fondo Amber Capital, controlado por Joseph Oughourlian, es también uno de los principales accionistas de Indra.

Nosotras y nosotros seguimos aspirando a que España se convierta en una verdadera democracia en la que mande la gente y no los que manejan el dinero y nunca se presentan a las elecciones. Por eso queremos volver a poner en pie a la izquierda, para poder aplicar las políticas que nos permitan redistribuir de manera definitiva la riqueza en nuestro país, hasta que la élite económica que explota y asfixia a nuestro pueblo para obtener beneficios millonarios simplemente desaparezca. Si aspiramos a un mundo en el que no exista ningún Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman o Tim Cook que mande más que millones de personas, es indispensable que en España y en todos los países del mundo exista una fuerza política como Podemos. En estos momentos, el bloque de poder español y sus aliados internacionales —los que mandan de verdad sin presentarse a las elecciones— están enormemente sobrerrepresentados en el Congreso: aunque esta élite parasitaria no supone en ningún caso más del 1% de la población, más del 90% de los diputados en la carrera de San Jerónimo defienden sus

intereses. Por eso, que haya una izquierda fuerte no solamente es indispensable para que pueda haber avance en derechos y recorte a los privilegios de los de arriba; además, es una cuestión democrática.

La operación Sumar: los aprendizajes y la memoria

Además de traccionar la acción gubernamental hacia la derecha durante toda la duración del gobierno de coalición y además de acusar a Podemos de hacer “ruido”, el PSOE trabajó durante toda la legislatura, junto a sus satélites mediáticos de La Sexta y el resto de la progresía mediática —como lleva haciendo por otra parte desde nuestro nacimiento, y de una forma análoga a lo que hizo con Julio Anguita— para construir a su izquierda un espacio manejable, que acepte (de una puñetera vez) los límites que ellos marcan. Eso es, más que ninguna otra cosa, la operación Sumar. Quizás lo más triste es que compañeros y compañeras que eran muy apreciados para nosotras colaboraran en esa estrategia con el único objetivo de ganar posiciones internas. Sin embargo, nosotras y nosotros no podemos olvidar que quien diseña y ejecuta esa estrategia no son los antiguos socios de Podemos sino el PSOE y la progresía mediática.

La naturaleza política de la operación Sumar se pudo ver en numerosas ocasiones durante buena parte de la legislatura anterior y también después. Fue iniciativa de la parte Sumar de Unidas Podemos el buscar a Ciudadanos y a la CEOE para sacar adelante la reforma laboral —aunque eso supusiera el voto en contra de ERC y Bildu y prácticamente su fracaso (si un diputado del PP no se hubiera equivocado al votar)—, también la estrategia fallida para derogar la Ley Mordaza forzando sin acuerdo una votación que no incluía la eliminación de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente. Fue Yolanda Díaz, junto a los Comunes e Izquierda Unida, los que aceptaban el veto del PP y del PSOE a la magistrada Victoria Rosell cuando se estuvo a punto de renovar el CGPJ. También fue el bloque que luego conformaría Sumar el que apoyó a Pedro Sánchez cuando el presidente cambió de opinión y decidió enviar armas españolas a la guerra de Ucrania o los que tardaron varios meses desde el 7 de octubre de 2023 en calificar como “genocidio” lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Ya en esta legislatura, hemos tenido que ver cómo se cruzaba una línea roja impensable y se intentaba infligir un recorte en las pensiones de los parados mayores de 52 años con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y la cobertura comunicativa del resto de piezas de Sumar, mintiendo en las ruedas de prensa y negando un recorte que estaba escrito en el BOE, al mismo tiempo que apoyaban —más recientemente— alargar la edad de jubilación hasta los 72 años para aquellas personas con una vida laboral más precaria que se van a ver obligadas a aceptar los incentivos aprobados por el gobierno. Afortunadamente, los votos de las diputadas de Podemos consiguieron parar el primer recorte aunque no la segunda estocada a los derechos de las y los pensionistas. En el segundo caso, era tan evidente que la medida es de derechas que la votó a favor el PP. Por cosas como estas hoy más que nunca nuestro país necesita que la izquierda, una izquierda orgullosa de serlo, ideológicamente fuerte y organizativamente capaz, se vuelva a poner en pie.

Es importante entender que los vetos y las expulsiones de las personas de Podemos mediante acuerdos de mesa camilla de vieja política y la complicidad con la violencia ejercida por la progresía mediática en manos de poderes económicos de derechas no es simplemente un “quítate tú para ponerme yo”. La clave siempre ha sido sustituir a Podemos por Sumar no para ejecutar un mero cambio de personas, sino precisamente para que los que manden en el lugar de los morados renuncien a toda voluntad de transformación profunda a cambio de un armisticio con el bloque de poder español. El trato implícito es “tú no intentes cambiar nada importante y yo no te voy a destruir civilmente desde las televisiones y los radios” y la operación Sumar —promovida y dirigida por el PSOE— es precisamente cambiar a los que no aceptan el trato por los que estampan sin problemas su firma en él.

Pensamos que es necesario explicitar todas estas estrategias que hemos sufrido para que todas las personas que de verdad están comprometidas con la transformación de nuestro país y el avance en derechos, puedan ser conscientes de ellas y actuar en consecuencia.

Actuar en consecuencia es que cuando Carmen Calvo pone sobre la mesa de negociación un ministerio de Ciencia para intentar comprar al negociador y eres Pablo Echenique, te levantes —en sentido metafórico— y te vayas. Actuar en consecuencia es que cuando empiezan hablar bien de ti en La Sexta y en La SER, sospeches. Actuar en consecuencia es que, si los jueces reaccionarios le hacen la guerra sucia a una compañera, te pongas a su lado sin fisuras aunque no sea de tu partido. Actuar en consecuencia es que si es el PSOE quien quiere elegir a tu candidato o candidata, tú digas que no. Como dice Juan Grabois, todas las militantes de Podemos deberían recordar que el objetivo de acabar con Pablo Iglesias primero y con Irene Montero después nunca fue destruir generales, siempre fue disciplinar coroneles. El objetivo siempre fue que nunca nadie más se atreviera. Antes te pegaban un tiro y te dejaban en una cuneta, hoy te destrozan la imagen en los medios de comunicación y te amargan la vida personal para luego intentar sustituirte por una “izquierda” domesticada. Desde un punto de vista histórico, algo vamos avanzando.

Del gobierno de coalición al gobierno de Sánchez

Finalmente, y tras un otoño de 2023 marcado por el comienzo de la última fase del genocidio perpetrado por el estado de Israel sobre el pueblo palestino, el PSOE pudo cumplir su objetivo largamente perseguido: expulsar a Podemos del gobierno y volver a construir un gobierno en el que ya sólo mandan Sánchez y el PSOE. Y, aunque ahora el presidente lance, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el bulo de que Podemos no dijo nada sobre la deriva bélica del PSOE cuando compartíamos gobierno, la hemeroteca certifica que Ione Belarra se refirió al partido del puño y la rosa como “partido de la guerra” ya en marzo de 2022, más de un año antes de dejar de ser ministra y cuando todavía no había ni siquiera elecciones generales convocadas. Todo el mundo sabe que esa oposi-

ción al belicismo de Sánchez fue uno de los principales motivos para expulsarnos del ejecutivo, del mismo modo que la ausencia de oposición por parte de Sumar es uno de los principales motivos por los cuales siguen dentro.

Las terribles consecuencias de esa operación política las llevamos viendo ya más de un año. Hoy España tiene un gobierno no gobierna, un gobierno que ha renunciado a transformar, que ha renunciado a abordar ninguno de los grandes retos que tenemos como país para que nuestra gente viva bien. En más de un año las únicas decisiones que ha tomado voluntariamente el PSOE son medidas que perfectamente podría haber adoptado un ejecutivo encabezado por Feijóo: hacer que el salario mínimo pague por primera vez el IRPF, dejar sin ingreso mínimo vital a miles de familias, el aval a las hipotecas que tanto deseaba el Banco Santander, una ley del suelo calcada a la ley del suelo de la derecha, la deportación de activistas saharauis mientras se envía un avión de las Fuerzas Armadas a traer a un ultraderechista peligroso venezolano, permitir que el fondo butre BlackRock se compre el 20% de una empresa estratégica como Naturgy y, más recientemente, intentar desmantelar el escudo social que con tanto esfuerzo Podemos construyó desde el gobierno o alargar la edad de jubilación para que la gente con la vida laboral más precaria tenga que trabajar hasta morir. La apuesta por el crecimiento exponencial del gasto militar a costa de la inversión social que estamos contemplando con pavor en las últimas semanas es, de nuevo, una decisión que habría tomado exactamente igual José María Aznar.

Por supuesto este gobierno ha sido incapaz de proponer ningún avance social significativo porque —y cada vez más gente se da cuenta de ello— el motor de las transformaciones sociales, feministas y económicas en la pasada legislatura, era Podemos.

De hecho, para las gentes de nuestro país han sido tan perjudiciales las decisiones de derechas que ha tomado el gobierno de Sánchez como las decisiones transformadoras que ha renunciado a tomar: la no intervención del mercado del alquiler, la no ruptura de relaciones con el Estado genocida de Israel, la inacción absoluta contra los fabricantes de mentiras y de odio —con un ‘plan de regeneración’ completamente vacío— o la renuncia a cualquier avance feminista o de justicia social. Sin Podemos en el gobierno y sin mayoría progresista que le obligue, el PSOE ha podido volver a ser el PSOE de siempre, un protector de las elites económicas de nuestro país.

Y, sin embargo, hay dos decisiones muy significativas que ha tomado este gobierno y que han comprometido definitivamente las posibilidades de transformación en esta legislatura. Gravisimos errores que España puede pagar durante, al menos, una década y que, desde nuestro punto de vista, abocan al gobierno a un fracaso prácticamente seguro.

El primero de ellos, con el que el PSOE entierra definitivamente la legislatura progresista, fue entregar el Poder Judicial a la derecha legitimando así toda la guerra sucia judicial que han sufrido los movimientos sociales, el independentismo y Podemos. Desde el momento en que los socialistas entregaron el Consejo General del Poder Judicial a la derecha, que reparte todo el poder en todos los altos cargos judiciales de este país, el mensaje para la derecha fue claro: el PSOE no estaba dispuesto a democratizar la justicia, a quitarles sus enormes privilegios y a transformar el poder fundamental que está evitando mayores avances sociales en nuestro país. Como siempre explica Irene Montero, a esta derecha cuando le das la mano, te coge el brazo. Y la derecha le cogió el brazo al PSOE. Desde ese momento los ataques judiciales a la familia del presidente se recrudecieron y la ofensiva judicial reaccionaria se acrecentó. La derecha política y judicial está tan envalentonada que “el último servicio a la patria” de Marchena fue imputar por primera vez en la historia de nuestro país al Fiscal General del Estado por unas supuestas filtraciones a medios de comunicación, en medio de uno de los peores casos de corrupción que ha vivido la Comunidad de Madrid y que afecta directamente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y a su novio. El PP puede robar a manos llenas el dinero de la sanidad de los madrileños y madrileñas para dárselo a la aseguradora privada en la que trabaja el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta del PP madrileño puede ser una corrupta que vive en un pisazo pagado con dinero corrupto, pero quien acaba imputado es el Fiscal General del Estado. Había que haberles parado los pies hace mucho tiempo.

El segundo error decisivo que ha cometido este gobierno y que compromete la credibilidad del PSOE de forma definitiva es la escasa contundencia demostrada ante el caso de corrupción que afecta al ex número 2 del partido y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. A día de hoy el presidente del Gobierno no ha respondido a una pregunta crucial para la democracia española: si sabía, cuando cesó al ex ministro en el verano de 2021 de forma absolutamente imprevista, algo de sus actuaciones abiertamente corruptas. Del mismo modo, es incomprensible que el PSOE todavía hoy no haya explicado si va a responder con su patrimonio de todo lo que se llevaron los corruptos que ellos mismos eligieron porque, a juicio de Podemos, quienes incurrir en delitos de corrupción tienen que devolver hasta el último euro robado. Es profundamente doloroso comprobar como, durante lo peor de la pandemia, mientras nuestro país sufría de forma indecible, el bipartidismo se dedicaba a lo que ha hecho durante décadas en este país, meter la mano en la caja y robar dinero público que tendría que haberse dedicado a nuestra sanidad, educación y sistema público de cuidados.

Todo ello genera una situación en la que se hace cada vez más evidente que este gobierno sin motor Podemos no sirve para construir en nuestro país la sociedad feminista, justa, democrática, ecologista y pacifista que cada vez más gente está demandando. En este momento, y frente a las fuerzas reaccionarias que quieren llevarnos a una sociedad individualista en la que reine la ley de la selva, volver a poner en pie a la izquierda es la tarea más importante que tenemos por delante. Humildemente pensamos que sólo Podemos, de la mano de la gente decente de este país que no se resigna y que ha aprendido que las cosas que parecían imposibles son posibles, está en condiciones de acometer dicha tarea. Y ahora, ¿qué hacemos?

Nos tumbaron, pero nos volvimos a levantar: y ahora, ¿qué hacemos?

Las decisiones que Podemos adoptó en el último año se han demostrado acertadas. Por un lado, pasar a formar parte del Grupo Mixto con el objetivo de tener capacidad política y voz propia en el Congreso se ha evidenciado como una absoluta necesidad en un contexto de derechización salvaje de nuestra sociedad (y de derechización significativa del gobierno). Hay muchas cosas, como exigir un embargo total de armas a Israel o reclamar avances feministas, que ya sólo pelea Podemos y que jamás habríamos podido impulsar en un grupo parlamentario — como es el de Sumar— que vetaba de forma sistemática nuestras iniciativas y que no dejaba hablar a nuestras portavoces. Por otro lado, fue también un acierto la decisión de presentar una candidatura de paz y feminista a las elecciones europeas para volver a poner a la izquierda transformadora en pie, en un contexto en el que adversarios y aliados nos daban por muertos.

En Podemos pensamos que en España sigue existiendo una mayoría social que quiere transformaciones feministas, ecologistas, sociales y democráticas ambiciosas. Y pensamos que sigue existiendo un amplio espacio electoral para movilizar a aquellas personas que desean votar a una izquierda verdaderamente transformadora. Por eso y después de haber pasado por una de las etapas más difíciles de nuestra historia, después de que nos hayan tirado al suelo y nos hayamos vuelto a levantar, entendemos como una obligación ineludible no solamente contestar adaptada a la coyuntura actual a la pregunta más vieja y más importante de la política —¿qué hacer?— sino, sobre todo, actuar en consecuencia para desplegar los diferentes movimientos y acciones.

En primer lugar, si queremos de verdad frenar la ola reaccionaria, es indispensable una izquierda que esté dispuesta a dar la batalla cultural. Dar la batalla cultural es atreverse a decir lo que nadie más dice pero que sabemos que es verdad. Es atreverse a hablar fuera de la ventana de Overton, fuera del espacio de lo ‘aceptable’. Es Irene Montero enfrentándose en televisión al discurso fascista de criminalización de la pobreza que nos intenta convencer de que decenas de miles de familias vulnerables son todas delincuentes; es Ione Belarra diciendo que si ella se viese enfrentado a la dicotomía de que sus tres niños tengan que vivir debajo de un puente o pegarle la patada a la puerta de un piso vacío propiedad de un banco, evidentemente elegiría la segunda opción y eso es exactamente lo que harían todas y cada una de las personas que están en el plató o en casa viendo el programa. La batalla cultural es Irene Montero diciendo en televisión que es imposible entender lo que significan los escuadrones paramilitares llenos de neonazis como Desokupa sin decir abiertamente que Ana Rosa Quintana, que tiene 48 pisos turísticos, los blanquea sin descanso en su programa. Es Ione Belarra señalando al PNV como “cachorritos de Repsol” cuando tumban al dictado de la petrolera el impuesto a las grandes energéticas o diciendo claramente que Juan Roig es un “capitalista despiadado” por llenar sus bolsillos aprovechándose de la inflación. Estar dispuestas a dar la batalla cultural, es también saber que —precisamente por hacer eso— vas a recibir toda la violencia política y mediática del establishment y estar preparadas para ello.

Además, la única forma de que la izquierda sea capaz de poder hacer transformaciones sociales —otra de las condiciones indispensables para poder frenar a la extrema derecha— es que dicha izquierda no esté intervenida por el PSOE. Esto significa que no hay forma de avanzar en derechos y recortar los privilegios de los de arriba si tu proyección política depende de los medios que defienden los intereses del PSOE, no hay forma de atreverse a cambiar las cosas si el destino personal de los dirigentes de la izquierda depende de que el PSOE los pueda colocar en este o aquel organismo público, en esta o aquella ONG controlada por el PSOE, en esta o aquella consultora. Para que la izquierda pueda ser verdaderamente autónoma y pueda trabajar para poder cumplir su programa, es indispensable no seguir la dirección política que marca el PSOE y eso no se puede hacer si el futuro económico y mediático de sus dirigentes depende de Ferraz. Por ello, y como han sabido hacer el PP y el PSOE, es una tarea fundamental para la viabilidad de un proyecto político diferente al bipartidismo que seamos capaces de construir todo un tejido social de apoyo, que incluya desde medios de comunicación a todo tipo de asociaciones de intervención social y cultural. Si los dirigentes de la izquierda están pensando que pueden continuar su carrera profesional trabajando para Ferreras, para la Fundación Alternativas o para el lobby de Pepiño Blanco, entonces es imposible que cambien nada sustancial. Esa autonomía política y organizativa, ejercida con determinación y con valentía, es la que permite no callar las verdades y es la diferencia entre Ione Belarra denunciando desde la tribuna que Sánchez se ha convertido en un «señor de la guerra» y los portavoces de Sumar dándole apoyo político explícito para evitar que se les cierren determinadas puertas.

Teniendo esto en cuenta, una de nuestras principales tareas en los próximos años es la de fortalecer nuestra propia organización en cada barrio y en cada pueblo. Si algo hemos aprendido durante los últimos diez años es que la militancia de Podemos es el mayor tesoro de este movimiento político y la brújula que nos permite no equivocarnos cuando llega la hora de tomar decisiones difíciles. Por eso, en la nueva etapa, es vital que cada militante tenga una tarea y que cada vez seamos más. La militancia de Podemos tiene que participar de forma muy activa en el futuro de este proyecto político, al mismo tiempo que se implica en los movimientos sociales y vecinales del lugar donde cada una viva. Ante el avance de la ola reaccionaria y la tibieza de la socialdemocracia, la única manera de que nuestra sociedad pueda plantar cara y poner pie en pared es que todas y cada una de las personas que militan den la batalla de las ideas. Es fundamental que ayuden a sus vecinos y vecinas en cada lugar y en cada espacio de nuestro país: en los lugares de trabajo, en la universidad, en la parada del autobús, en la cena familiar, en las AMPA, en las calles, y en los eventos sociales. La movilización popular con conciencia de clase es condición de posibilidad para que pueda haber cambios. Al mismo tiempo, es indispensable que continuemos con una militancia activa y aguerrida en las redes sociales, que son cada vez más un campo de batalla ideológico, y que colaboremos todo lo posible en la puesta en pie de proyectos mediáticos propios, como Canal Red. En Podemos, somos conscientes de que la única fuerza que tenemos es la fuerza de la democracia. Si nuestras caras visibles pueden dar la pelea en las instituciones y en los medios de comunicación, es únicamente porque sabemos que tienen a miles de compañeras apoyando detrás.

Por último, no debemos nunca olvidar que todas las consideraciones tácticas y estratégicas que hemos resumido en este apartado tienen como objetivo primordial el cambio político y social. Por supuesto que tenemos la misión de fortalecer y hacer crecer a Podemos, pero la tenemos no como un objetivo en sí mismo, sino como la forma que entendemos indispensable de poder generar las condiciones políticas y materiales para que nuestro país y nuestra sociedad sean más justos y mejores. Por ello, lo más importante que tenemos que tener siempre en la mente es a quién defendemos, para qué estamos aquí y cuál es el horizonte que estamos trabajando para construir. En el último apartado de este documento, dedicamos un espacio a esbozar nuestro proyecto de país y todavía tendremos que hacerlo más en detalle cuando llegue el momento de elaborar el próximo programa electoral, pero baste decir aquí que nosotras somos aquellas que defendemos con más fuerza unos servicios públicos universales y de calidad en contraposición a un régimen de guerra que destina obscenas cantidades de dinero público no a proteger a la ciudadanía sino a la fabricación de dispositivos para matar, una reforma fiscal verdaderamente ambiciosa que haga pagar más a los de arriba para poder financiarlos, los avances feministas y de derechos LGTBIQ+ más potentes del mundo para construir una sociedad en la que nadie sea más que nadie y en la que los cuidados están repartidos, un ordenamiento jurídico y social en el que migrar sea un derecho, el racismo un oscuro recuerdo del pasado y en el que ningún ser humano sea ilegal, nosotras somos las que tenemos la valentía necesaria para garantizar el derecho a una vivienda digna para todas y cada una de las familias de nuestro país arrebatando a los grandes caseros y a los especuladores rentistas la capacidad de lucrarse con la vida de la gente, una transición ecológica con componente de clase que no olvide que son los ricos y las grandes empresas petroleras y energéticas los que más contaminan y más huella de carbono tienen y una democratización profunda de todos aquellos poderes fácticos que no se presentan a las elecciones —como las fuerzas de seguridad, el poder judicial o el poder mediático— para poder hacer viable todo lo anterior y para caminar con paso firme hacia una República en la que nadie esté por encima de la ley, en la que todo el mundo tenga derecho a una vida digna y en la que todos los pueblos de España puedan decidir democráticamente su futuro.

La batalla cultural: Podemos como espejo del poder y motor ideológico de la izquierda

Desde su nacimiento la clave para entender el impacto de Podemos en la sociedad y en el sistema político español, así como su influencia internacional, fue su capacidad de desafiar los consensos ideológicos dominantes. No era solo que Podemos denunciara la corrupción y a sus representantes políticos y económicos (la casta). Podemos era además un espejo frente al poder y también frente a la izquierda hasta entonces existente que desafiaba los límites de lo posible.

Lo que Podemos dijo desde el Parlamento no hizo sino potenciar ese papel y, desde el Gobierno, el impacto de las políticas feministas ejemplifica que, lejos de que aquella experiencia representara la domesticación ideológica de nuestro partido, representó por el contrario la plena conciencia de que la guerra ideológica y cultural se da también desde posiciones de gobierno.

Los últimos años, los más difíciles en términos de peso institucional y tras haber sufrido una enorme violencia mediática, judicial y también por parte de fuerzas aliadas, no han limitado el carácter de reserva ideológica de un partido que, aun cuando está mucho más débil que en el pasado, sigue ejerciendo un papel de núcleo irradiador.

Que el PSOE siga definiendo como sus mayores logros las políticas que le arranca Podemos o que en España se haya normalizado hablar de los jueces como actores políticos derechizados o de la corrupción mediática como fenómeno es el resultado de ese carácter irradiador de nuestro partido. Incluso el surgimiento y extensión a América Latina de Canal Red es una de las consecuencias de nuestra forma de asumir la ideología como terreno de combate.

Seguir trabajando para que nuestros cuadros y militantes sean los activistas de primera línea en la guerra cultural con la derecha debe ser uno de nuestros objetivos. La trumpización de la vida política y mediática así como el auge de las ultraderechas no hace sino reforzar nuestro diagnóstico. No se puede ir a la guerra cultural en chanclas como ha hecho históricamente la izquierda.

El análisis de la situación actual debe partir, además, del reconocimiento de una realidad. La reacción nos aventaja en la batalla cultural y ha conseguido instalar sus marcos en gran parte de la sociedad actual. Hoy se habla más de okupación que de desahucios, de la inmigración como una amenaza más que como una realidad humana y crecen las actitudes machistas entre los más jóvenes, mientras se atacan día sí y día también los avances feministas. Si esto ha sido posible ha sido gracias a la labor cómplice de los medios de comunicación con la agenda ultraderechista, pero también al activismo digital de la ultraderecha y sus 'influencers'.

En ese sentido, hoy son más pertinentes que nunca las reflexiones de autores como Gramsci y Stuart Hall sobre la hegemonía y la batalla cultural. Para recuperar la iniciativa política debemos trabajar duro para recuperar la hegemonía cultural, una batalla que hoy se libra en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación que acaban generando también contenidos para esas mismas redes. Y todo ello sin abandonar la movilización social en las calles y en los barrios, capaces todavía de romper las cámaras de eco y la realidad virtual que a veces generan las redes sociales y poner en la agenda temas como el acceso a la vivienda, el alto coste de los alimentos o los ataques a la sanidad y la educación públicas.

Una izquierda orgullosa de serlo, autónoma y no intervenida por el PSOE para poder llevar a cabo transformaciones

En este momento y más que nunca antes, la izquierda —en nuestro país y en todo

el mundo— tiene que recuperar el orgullo de lo que es, de lo que defiende y de cómo se organiza. Eso que se ha venido llamando malmenorismo no es otra cosa que una alfombra roja para que la derecha y la extrema derecha se hagan con gobiernos a lo largo y ancho del globo. La alternativa a un nazi peligroso como Trump no puede ser un genocida como Biden. La estrategia de ofrecer a las personas progresistas opciones conservadoras con maquillaje progre no sólo es pésima en términos de mejoras concretas para la vida de la gente, es que tiene como consecuencia casi natural la conformación de los gobiernos de derechas neoliberales y fascistas que estamos viendo en tantos países.

Por ese motivo nuestra tarea en este momento es hacer crecer política, social e institucionalmente una izquierda que recupere nuestra capacidad de transformación y que esté dispuesta a cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Pensamos que estos años hemos demostrado que los avances en derechos se producen cuando la izquierda está fuerte. Sin izquierda fuerte, en España vuelve a gobernar el bipartidismo y la derecha manda aunque no gobierne. Las desastrosas consecuencias de esto las estamos viendo a lo largo de este año y medio de gobierno sin Podemos: entregan el Consejo General del Poder Judicial a la derecha reaccionaria, se silencia el feminismo, se empeñan en desmantelar el escudo social, las medidas de vivienda que adoptan son las mismas que podría tomar el Partido Popular y se mete a España en un régimen de guerra que sería muy del agrado de los tres de las Azores. Se demuestra, una vez más que es bueno para España que la izquierda consiga hacer cosas que el bipartidismo y el poder establecido no quieren que pasen o que nos dicen que son imposibles, como lo eran la subida del salario mínimo, la ley trans o la congelación por ley de los alquileres.

Precisamente por esto, el poder establecido quería que el gobierno de coalición PSOE-Podemos fuese una anécdota exótica de la historia de España. Sin embargo, los hechos demuestran que ese período ha sido el momento de mayor estabilidad política para España en los últimos diez años. Los años correspondientes a la legislatura 2020-2023 han sido los únicos en los que ha habido presupuestos anualmente y, mucho más importante que esto, avances firmes en derechos. España necesita, por tanto, una izquierda que sea fuerza de gobierno y que tenga capacidad de transformación en todos los espacios de poder de la sociedad: judicial, mediático, político, económico.

Para recuperar la capacidad de transformación la izquierda debe alcanzar, por lo menos dos objetivos.

Por un lado, la izquierda, para transformar, debe proteger su autonomía, es decir, su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma al poder establecido y también a la progresía. Esto significa que Podemos está dispuesto a tener una relación de coordinación, de igual a igual con el PSOE, pero no de subordinación.

Este punto es especialmente relevante porque el PSOE tiene un amplio historial de intervención, a través de sus medios de comunicación afines y otras estrategias menos explícitas, en los espacios políticos situados a su izquierda. La operación dirigida contra Julio Anguita en un momento de crecimiento de Izquierda Unida para debilitar su proyecto a través de los liderazgos de López Garrido y Cristina Almeida, que acabaron finalmente integrados en las filas del PSOE y que continúan aún hoy como tertulianos en La Sexta, es un buen ejemplo de lo que tratamos de explicar. Quizás por eso la gente con más canas en el pelo vio más claramente que algunas de nosotras lo que hacía la progresía mediática dorándole la píldora a Iñigo Errejón para que compitiera contra Pablo Iglesias en Vistalegre 2, o animándole a presentar una candidatura en 2019 a las elecciones generales para debilitar las opciones de Unidas Podemos de entrar en el gobierno del Estado.

Los satélites mediáticos del PSOE, como La Sexta y el resto de la progresía mediática, corren raudos a promocionar cualquier perfil que pueda debilitar las fuerzas del proyecto de transformación social que surja a la izquierda del PSOE. El PSOE cuida políticamente y ofrece una vida de alfombras, premièeres y festivales a todo aquel que asuma sus límites y no represente una verdadera amenaza a los intereses económicos y políticos del sistema, al mismo tiempo que golpea por todos los medios a su alcance y sin descanso a quienes no acepten dicha subordinación. Por eso proteger nuestra autonomía frente a la progresía política y mediática es la condición de posibilidad de supervivencia de nuestro proyecto de transformación.

Por otro lado, la izquierda para tener capacidad de transformación necesita estar presente en todos los ámbitos y poderes en los que se toman decisiones. En estos años hemos visto con especial crudeza como son los poderes con menos controles democráticos, el mediático, el económico y el judicial, donde más fácilmente se atrincheran los sectores reaccionarios para mandar sin presentarse a las elecciones. Democratizar esos poderes es un imperativo democrático de nuestro tiempo.

España necesita seguir avanzando en democracia, en feminismo, en justicia social, en derechos. Y para avanzar en derechos, España necesita una izquierda fuerte de poder y de gobierno capaz de hacer posible lo que siempre nos dicen que es imposible, con autonomía política y por tanto, plenamente dispuesta a coordinarse con el PSOE pero sin ningún tipo de subordinación. Podemos se presentará a las siguientes citas electorales con estos objetivos políticos como prioridad.

Podemos, una herramienta de transformación en manos de la gente

Podemos ha tenido la voluntad, desde su nacimiento, de ser una herramienta política, social e institucional en manos de la gente. A diferencia de otras culturas

políticas de la izquierda de nuestro país, nosotras y nosotros siempre hemos entendido que los movimientos y las organizaciones sociales de base representan lo mejor de nuestro país y son la punta de lanza del avance democrático. Desde ese punto de vista, Podemos siempre se ha puesto a disposición de dichos movimientos y organizaciones para, por un lado, trasladar sus demandas y prioridades a las instituciones estatales, autonómicas y municipales y, por otro, para trabajar con lealtad, mano a mano, a pie de calle con ellas.

Pensamos que un buen ejemplo de esto es el trabajo que hemos realizado de la mano del movimiento feminista, del movimiento por el derecho a la vivienda digna y en defensa de los servicios públicos, así como del movimiento por el fin del genocidio en Palestina. Las prioridades que han marcado estos movimientos han sido también las prioridades del partido y muchas militantes de Podemos son a su vez activistas en estos espacios. Desde aquí sólo podemos agradecer su trabajo a todas las personas que construyen un país más justo y feliz para todas, sin esperar nada a cambio. Nada hay mejor que la gente que da sin esperar nada a cambio, salvo una sociedad con justicia social y más igualitaria.

En estos años de trabajo, Podemos ha ampliado su base y trabajo social a través de las Oficinas Antiburocracia y de nuestra organización juvenil, Rebeldía. Pensamos que esa es la senda a seguir, al mismo tiempo que esperamos que cada militante de Podemos sea a su vez un activista social implicado en alguno de estos movimientos y/o en las actividades políticas de defensa del territorio y de sus barrios y ciudades.

Creemos que, ahora más que nunca, ante el avance de las derechas y ante la ola reaccionaria internacional, es el momento de redoblar nuestros esfuerzos organizativos. En concreto, pensamos que las y los militantes de Podemos tienen que:

- Organizarse, reforzar su militancia en todos los espacios de Podemos, especialmente en los círculos territoriales y sectoriales. Cada círculo debe ser un espacio de dinamización de la vida política y social de su barrio o municipio. Cada militante debe tener al menos una tarea política concreta que desarrollar cotidianamente, sea esta formativa, de acción directa, en las oficinas de colaboración social de Podemos o a nivel sectorial.
- Además, cada militante de Podemos tiene que ser un activista social que contribuya al fortalecimiento de los movimientos y organizaciones sociales y del sindicalismo combativo. Esto incluye, por supuesto, al movimiento por el derecho a la vivienda, a los sindicatos de inquilinas, a los movimientos pensionistas, a las mareas verde, blanca y de todos los colores, pero también a las organizaciones de autónomos con perspectiva de izquierdas, a las asociaciones de pequeños agricultores familiares, a las agrupaciones de pequeños comerciantes, o en general a cualquier espacio social con intereses contrapuestos a los de la élite económica y política, y con los que podamos establecer alianzas. Es muy importante, asimismo, que la militancia de Podemos participe en la construcción y desarrollo de herra-

mientas mediáticas propias, como uno de los elementos de la sociedad civil indispensables para dar la batalla política.

- La militancia de Podemos tiene que contribuir a que la ciudadanía rompa el silencio dando ejemplo. Es la hora de defender lo común y no podemos callarnos en las conversaciones de amigas o compañeros de trabajo o familia. Tras unos años en los que la progresía ha conseguido convencer a mucha gente de izquierdas de que es mejor estar en silencio, de que defender el avance en derechos es hacer ruido, de que estamos corriendo demasiado o yendo demasiado lejos, ahora vemos con claridad que ese es un discurso anti-político cuyo efecto es silenciar a la izquierda para que la derecha lo ocupe todo. No volvamos a caer en esa trampa: a hacer ruido y a incomodar, porque más incómodo es el machismo, el racismo, la injusticia, el neoliberalismo y la guerra.
- Esta batalla por las ideas, los y las militantes de Podemos no solamente deben darla en el ámbito físico de los centros de trabajo, las AMPAs o la cena familiar, sino también en el ámbito digital. La militancia física es indispensable, pero la militancia en internet y en las redes sociales también lo es. Cada vez más, en el mundo en el que vivimos, millones de personas eligen Internet como la vía prioritaria para recibir información y argumentaciones políticas. Por eso, ninguna organización ni ningún proyecto que aspire a crecer puede dejar de dar el combate en las redes sociales. La militancia digital de Podemos ha sido y sigue siendo una de las más poderosas del país. Ese poder democrático que conseguimos con la fuerza de los números y también con la fuerza de nuestros argumentos, tiene que seguir creciendo para que podamos llegar cada vez más lejos.
- Las militantes y los militantes de Podemos tienen que ser el motor que extiende la esperanza. La esperanza no como emoción, sino como tarea que se construye cotidianamente un mundo mejor en nuestro barrio, con nuestras vecinas y vecinos. Es difícil, lo sabemos, tiene un enorme coste político, pero si algo hemos aprendido en estos años es que se puede. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. En eso consiste la vida y la historia.

Un programa valiente y con claridad ideológica: hacia la República

Si para algo sirven todos los aprendizajes conseguidos a lo largo de esta última década, si para algo sirven las consideraciones estratégicas y tácticas recogidas en este documento, si para algo sirve el trabajo militante y la construcción y fortalecimiento de las raíces del partido en los territorios, si para algo sirve Podemos, es para llevar adelante un proyecto de país. Es para llevar adelante un programa político, valiente y con claridad ideológica, que sea capaz de mejorar la vida de la gente y el sistema democrático de nuestro país, de forma que todas las personas puedan tener un derecho efectivo a una vida digna, feliz y completa, y que nunca volvamos a estar gobernados por un puñado de personas muy poderosas que no se presentan a las elecciones, sino por la voz del pueblo expresada de forma democrática en las urnas.

Aunque este documento político de la V Asamblea de Podemos no es el lugar para desarrollar un programa electoral exhaustivo, sí queremos esbozar las líneas principales de nuestro proyecto de país en algunos de los epígrafes que consideramos más importantes.

Uno de los ámbitos más sangrantes que más afectan a la economía de las familias y que más impiden desarrollar un proyecto de vida es, sin duda, el ámbito de la vivienda. La vivienda es actualmente en España un bien de mercado, no un derecho, aunque está recogido como tal en la Constitución. Este modelo especulativo ha generado una estructura de propiedad basada en el acaparamiento de cada vez más vivienda por grandes tenedores que se lucran con un bien de primera necesidad y han convertido el acceso a la vivienda en el principal factor de desigualdad y exclusión social. Las familias, especialmente las que viven de alquiler, cada vez destinan más recursos a la vivienda y cada vez hay más personas desahuciadas, expulsadas o forzadas a vivir en caravanas o en la calle. España sufre hoy una emergencia habitacional estructural, donde el problema es que la especulación tiene secuestrada gran parte de la oferta. La turistificación genera también una restricción de la oferta al destinarse a pisos turísticos o a casas vacacionales de no residentes. España tiene un parque de más de 26 millones de viviendas, 3,8 millones de las cuales están vacías, mientras el parque de vivienda pública es solo del 2,5%, uno de los más bajos de Europa. La solución no está en construir más, ni en el pelotazo urbanístico que nos llevó a la crisis de 2008. Hay que hacer frente a los bancos, fondos buitres, promotores inmobiliarios, rentistas y demás especuladores, obligándoles a sacar su vivienda al mercado. Es esencial reconocer la vivienda como un derecho y no como un negocio y eso requiere de una intervención integral. No existe una única medida que funcione como una “bala de plata” para garantizar el acceso a una vivienda digna al conjunto de la población. Para conseguir este objetivo, es indispensable la implementación valiente y coordinada de un conjunto de políticas públicas audaces que sean capaces de arrinconar los intereses especulativos desde diferentes ángulos. Por un lado, es urgente implementar una regulación contundente de los precios del alquiler, bajándolos un 40% en el conjunto del Estado como medida de choque. Al mismo tiempo, y para evitar que los rentistas decidan retirar del mercado del alquiler residencial sus pisos, hay que prohibir la utilización de las viviendas como piso turístico. Además, hay que establecer sanciones ejemplarizantes a aquellos que utilicen en fraude la modalidad del alquiler de temporada. Para evitar fugas especulativas adicionales, hay que poner un impuesto a las viviendas vacías. También hay que establecer una moratoria inmediata a la compra de vivienda que no sea para vivir en ella, para que un pariente cercano viva en ella, o para uso residencial como segunda vivienda. Asimismo, hay que establecer un máximo de viviendas en propiedad para cada persona física y jurídica del país como ya demanda la mayoría de la población según las encuestas. Estas políticas deben ser combinadas con un rápido aumento del parque público de alquiler social, que se deberá incrementar mediante la expropiación del uso del 50% de las viviendas en manos de grandes tenedores, así como de la puesta en pie de un programa de compra masiva de viviendas en el mercado privado para incorporar al parque público aquellos pisos que ya no sean del interés de los rentistas. Todo ello irá acompañado del establecimiento de una protección absoluta contra los desalojos sin alternativa habitacional de familias vulnerables, así como con la disolución de los comandos neonazis como Desokupa, que se dedican a hacer negocio mediante la criminalización de la pobreza y mediante la violencia. En el proyecto de país que nosotras defendemos, no hay casas sin gente ni gente sin casa.

Además de las medidas concretas, es vital en este ámbito dar también la batalla cultural. El poder económico, político, mediático y judicial está respondiendo a esta emergencia habitacional criminalizando a las personas vulnerables para proteger a los especuladores. La alarma social en torno a un problema residual como la okupación, la criminalización de los inquilinos que no pueden pagar el alquiler con términos como “inquiokupas”, la persecución de los movimientos que paran desahucios y defienden el derecho a la vivienda y de las personas sin hogar tratan de desviar la atención de los verdaderos responsables.

En el ámbito internacional es, también, en una de las áreas en la que se hace más evidente la necesidad de que exista en España y en el conjunto de países del mundo una izquierda fuerte como Podemos. Si algo hemos visto a lo largo de estos años es que, cuando hablamos de la guerra, las diferencias entre la extrema derecha, la derecha, la socialdemocracia e incluso algunos partidos que se autodenominan ‘verdes’ se difuminan y todos ellos confluyen en un apoyo acrítico al régimen de guerra. Así, cuando dio inicio el furor bélico otanista respecto de la guerra de Ucrania, cuando todos los medios de comunicación sistémicos bombardeaban permanentemente con la necesidad de enviar armamento a Kiev y tachaban de ‘aliado de Putin’ a cualquiera que se atreviese a hablar de paz, Podemos se quedó prácticamente solo en el Parlamento al negarse a estos envíos. Desde Vox a los partidos ahora integrados en Sumar, pasando por el PP y el PSOE, la inmensa mayoría del hemisferio aplaudió la decisión de Pedro Sánchez de meter a España en una guerra en suelo europeo, a las órdenes de Estados Unidos a través de la OTAN. Hoy, que todo el mundo está hablando de la necesidad de llevar a cabo negociaciones para conseguir un armisticio definitivo, hoy que resulta completamente evidente que el único país que se ha beneficiado de la guerra de Ucrania ha sido Estados Unidos, tenemos que recordar que defender la paz es una obligación, no solo cuando es fácil hacerlo, sino muy especialmente cuando es difícil. En este sentido, la oposición frontal al régimen de guerra al que nos quieren llevar las élites europeas, y también el gobierno de Sánchez, es una obligación política y moral para una organización como la nuestra. En estos momentos, somos una de las poquísimas fuerzas políticas en España que se oponen contundentemente al aumento del gasto militar y la única de ámbito estatal. Seguiremos manteniendo esta oposición frontal aunque se nos intente disciplinar violentamente mediante el aplastamiento mediático porque es indispensable que, en esta época, haya una voz contraria al régimen de guerra. Al mismo tiempo, y aunque una parte del gobierno de Sánchez ha hablado en contra de lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza, la mayor parte de sus ministros ni siquiera ha llegado a pronunciar la palabra “genocidio”. Los que sí lo han hecho, algunos de los ministros de Sumar, han tardado meses en verbalizar el concepto, a la espera del permiso de su socio mayoritario. Pero es que, más allá de lo verbal, el Gobierno de España no ha tomado absolutamente ninguna acción para intentar frenar el peor exterminio de personas en clave de limpieza étnica que la humanidad ha contemplado en el siglo XXI. Tanto el gobierno de Sánchez como la Unión Europea se han negado sistemáticamente a acometer ninguna medida que pudiese afectar a la operativa genocida del gobierno de Netanyahu, protegido por los Estados Unidos de América. A día de hoy, y ante la reanudación del genocidio después de una breve pausa, ante la pavorosa declaración de Donald Trump anunciando una limpieza étnica en la Franja de Gaza para levantar un paraíso turístico para ricos sobre los cadáveres, hoy más que nunca, el apoyo del viejo continente y de la administración Trump a los asesinos de niños palestinos sigue siendo tan firme como siempre.

Por todo ello, y porque no es compatible con la vida habitar en un mundo en el que la violencia bélica es aceptada como forma de dirimir los conflictos, como no es viable aceptar un esquema de relaciones internacionales que no cumpla con los derechos humanos, desde Podemos abogamos por cesar inmediatamente el seguidismo español y de la Unión Europea a la voluntad imperialista de los Estados Unidos a través de la OTAN y lo decimos con toda claridad. Si ya era muy difícilmente justificable para los intereses propios de Europa y de España actuar al dictado de las órdenes del hegemón norteamericano, ahora que un fascista como Donald Trump ocupa la Casa Blanca, la posición otanista se vuelve imposible de defender. Hay que abandonar la OTAN a la mayor brevedad y hay que desacatar la orden de Donald Trump de aumentar el gasto militar en Europa. Por supuesto, desde Podemos defendemos la ruptura inmediata de todas las relaciones diplomáticas y comerciales con el estado genocida de Israel y, en particular, un embargo a la compra y a la venta de armamento a dicho país. Si seguimos aceptando las órdenes de un imperio que justifica los genocidios y que no tiene ningún problema en llevar a Europa a la guerra si eso favorece sus intereses económicos, entonces nunca vamos a poder ver un mundo en paz.

Por supuesto, una fuerza como la nuestra también sabe que es indispensable, para poder avanzar hacia un orden internacional diferente, que nuestro país sea capaz de establecer alianzas con los pueblos hermanos de América Latina, una zona que, por innumerables motivos históricos, culturales y también comerciales debería ser una de las más absolutas prioridades para nuestro país. Esto es especialmente relevante con aquellos países latinoamericanos que disfrutaban de gobiernos progresistas y de izquierdas, como Colombia, México o Brasil. Al mismo tiempo, es hora de establecer unas relaciones internacionales de igual a igual con los diferentes pueblos de África y abandonar de una vez por todas la visión eurocéntrica, cada vez más escorada hacia el racismo y la xenofobia.

El respeto a los derechos humanos de las personas migrantes es, de hecho, uno de los principales ejes políticos de nuestro tiempo. A la manera de los nazis y los fascistas de principios del siglo XX, tanto Donald Trump como el conjunto de extremas derechas mundiales, incluyendo a las europeas y a la extrema derecha española, han hecho de la violencia discursiva y política —preámbulo de la violencia física— contra las personas migrantes una de sus banderas y de sus señas de identidad. Ante este avance de posiciones, la socialdemocracia y sus partidos satélite no han estado a la altura. En vez de poner pie en pared y afirmar con contundencia que ninguna persona es ilegal, el PSOE y sus partidos homólogos en el conjunto del continente han optado, en cambio, por comprar una buena parte de las ideas de la extrema derecha. El mejor ejemplo de esto es, quizás, la firma en el seno de la Unión Europea de un pacto migratorio tan xenófobo que fue aplaudido abiertamente por Giorgia Meloni.

Frente a esta violenta crueldad, que además es absolutamente suicida desde el punto de vista económico para los países desarrollados —por poner solamente un ejemplo, si Donald Trump cumple su amenaza de expulsar a millones de personas migrantes, el daño a la economía norteamericana va a ser muy grave—, frente a este eje del odio en lo político, nosotras nos situamos con los dos pies

en el polo opuesto. Para nosotras, migrar es un derecho humano. Para nosotras, ninguna persona es ilegal. Para nosotras, todas las vecinas y vecinos que viven y trabajan con nosotras en España tienen que ser no solamente regularizados inmediatamente sino que, además, se les deben conceder la nacionalidad española mediante un procedimiento exprés de carta de naturaleza —si se puede hacer con deportistas de élite, también se puede hacer con familias trabajadoras— aprobado por el Consejo de Ministros. Del mismo modo que no consideramos aceptable excluir a las personas migrantes de los derechos económicos y sociales, tampoco encontramos motivo para impedirles que participen de la vida política y civil del país que las acoge. Quien vive, trabaja y ama en España, tiene que tener DNI español y derecho al voto. Para nosotras, la discriminación por razón de raza o de origen es miseria moral. Para nosotras, las personas migrantes que vienen a nuestro país traen diversidad y riqueza. Por eso, todos los servicios públicos y todos los derechos de ciudadanía tienen que ser universales para todos los seres humanos que viven en España sin ningún tipo de distinción. Por eso, defendemos la derogación de la ley de extranjería y el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), queremos el fin de las redadas racistas y que ninguna persona que denuncie un delito de odio o racismo se juegue la deportación. Por eso, vamos a trabajar en Europa sin descanso para derogar el Pacto Europeo de Migración y Asilo y defender políticas que garanticen derechos y dignidad en lugar de control y restricciones. Por eso nos abrazamos con nuestras hermanas y hermanos llegados de todo el mundo y decimos alto y claro que no vamos a tolerar el programa racista que pretende poner a pelear al último de la sociedad contra el penúltimo para que así nos olvidemos de que los responsables de nuestros problemas están en los despachos más altos de las torres de cristal de los barrios financieros. Ni paz entre clases ni lucha entre pueblos. Lucha de clases y fraternidad entre los pueblos.

Otra de las obsesiones de los reaccionarios en las últimas décadas ha sido, por supuesto, el avance del movimiento feminista y de los derechos de las personas LGTBIQA+. Que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya dicho recientemente que la ideología de género justifica la pedofilia; que destacados dirigentes de VOX hayan tachado de enfermas a las personas homosexuales en España; o que una de las primeras medidas de Donald Trump haya sido prohibir la participación de las mujeres trans en las competiciones deportivas, son solamente un puñado de señales de una violencia política que se ejerce de forma sistemática por parte de la extrema derecha contra las mujeres y las personas LGTBIQA+. En España, esto lo sabemos muy bien, ya que vivimos en la legislatura anterior una de las ofensivas más violentas y más despiadadas que se recuerdan contra un ministerio y contra una dirigente política en la persona de Irene Montero. En los años en los que Irene, las compañeras del Ministerio y el conjunto del movimiento feminista consiguieron aprobar una nueva ola de derechos, prácticamente como nunca se había visto antes, en los años en los que se aprobó la nueva ley del aborto, en los que se aprobó el Plan Corresponsables, en los que se empezaron a tomar las primeras medidas para cerrar la brecha salarial, en los años en los que se aprobó la Ley Trans y LGTBI, y en los años en los que se puso el consentimiento por primera vez en el centro del Código Penal, en la ley “solo sí es sí», en los años en los que la legislación feminista avanzó décadas, también vimos a las diputadas fascistas de VOX ejercer la violencia política contra la ministra en el Congreso de los Diputados, vimos infinidad de tertulias vomitando odio contra las personas trans y llegamos a ver hasta un movimiento organizado de jueces que se pusieron a reducir penas a

agresores sexuales solamente para intentar tumbar los avances y desprestigiar al movimiento.

La brújula feminista es, sin duda, uno de los principales vectores ideológicos que recorren toda nuestra acción política y nuestro programa. Por ello, desde lo conseguido, partiendo de los logros de la legislatura que más ha avanzado en derechos feministas desde la recuperación de la democracia, tenemos la firme voluntad de seguir avanzando en esa dirección porque sabemos que un país verdaderamente feminista es un país mucho más democrático, justo y próspero. Por ello, en esta Asamblea, hemos querido incluir de nuevo un documento específico Feminista y LGTBIQA+ en el que recogemos en detalle el complejo y ambicioso proyecto de país que dibuja de forma integral la perspectiva feminista según la entendemos en Podemos. Entre las tareas pendientes, podemos mencionar la erradicación de todas las violencias machistas desde una perspectiva interseccional, seguir avanzando en la contabilización precisa de todos los feminicidios, sean del tipo que sean, desplegar todos los recursos recogidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluida la financiación de los servicios de atención a víctimas, implementar todas y cada una de las medidas que contiene la ley solo sí es sí — que están publicadas en el BOE, pero que el PSOE mantiene parcialmente congeladas—, o seguir caminando hacia un horizonte de abolición de la prostitución, pero siempre teniendo en cuenta que la prostitución ha sido y es una estrategia de supervivencia femenina y, por lo tanto, dicho camino tiene que ir acompañado de las garantías para que todas las mujeres puedan tener vidas dignas en el ámbito material; además, hay que prohibir el lucro de terceros para que nadie obtenga beneficio económico con la explotación sexual de las mujeres, así como regularizar a todas las personas mediante como una de las medidas más eficaces para evitar que las mujeres estén obligadas a dedicarse a la prostitución o no puedan salir de ella. Es también necesario dotar de la máxima protección institucional a las madres e implementar en toda la legislación y los protocolos que sean necesarios la idea básica de que ningún maltratador puede ser un buen padre. Hay que formar a los operadores jurídicos en materia de igualdad y de feminismo para que, entre otras muchas cosas, dejen de utilizar conceptos machistas y anticientíficos como el síndrome de alienación parental. Desde una perspectiva feminista, es preciso también avanzar en medidas que eviten la violencia política contra las mujeres en el espacio público y político, así como trabajar para que las redes sociales estén libres de odio misógino, LGTBIQA+fóbico y racista. También es fundamental la diversidad de los cuerpos y luchar contra la violencia que se ejerce contra los cuerpos no normativos, como es el caso, por ejemplo, de la gordofobia. Aunque se ha conseguido y se ha ampliado en la legislatura pasada el derecho al aborto, hace falta todavía garantizar que este derecho se cumple y que se puede acudir a él en el sistema público de sanidad y, como los derechos sexuales y reproductivos son mucho más que el derecho al aborto, hay que seguir avanzando en medidas que garanticen la educación sexual, que combatan la pobreza menstrual, que nombren y pongan coto a la violencia obstétrica, pero también que persigan la explotación reproductiva que suponen los vientres de alquiler. Por último, no hay que olvidar nunca que la perspectiva feminista contamina —en el mejor significado de la palabra— todas las áreas de la acción política de un partido como el nuestro. Por ello, nosotras también defendemos que hay una manera de hacer política de vivienda que tiene perspectiva de género, que hay una forma de entender el urbanismo y la accesibilidad con la lógica feminista como brújula, que hay una brecha económica muy grande entre las mujeres y los hombres y que eso afecta a las

pensiones, a los salarios o a la economía de los cuidados. Aunque aquí recojamos algunas medidas específicas, en todo el programa de Podemos, el feminismo está trenzado con la mayoría de medidas que se plantean.

En este sentido, parte fundamental del proyecto político de Podemos —y del país feminista hacia el que queremos avanzar— es también el cuidado, extensión y reforzamiento de un sistema de servicios públicos de calidad y para todas. Frente al modelo de la derecha y la extrema derecha, de desmantelamiento y privatización del estado del bienestar, para convertir lo que deberían ser derechos universales en privilegio de unos pocos, pero también frente al modelo del PSOE y de sus partidos satélite, que solamente apuesta por lo público cuando ello no choca con los intereses de los grandes capitales y apenas sirve para alternar tímida-mente períodos de crecimiento débil o incluso de estancamiento con los períodos de desmantelamiento y retroceso que trae la derecha, nosotras defendemos una sanidad pública, una educación pública y un sistema de cuidados que alcance a todas las personas, con una financiación suficiente para proporcionar un servicio de calidad, con derechos laborales y buenos salarios para sus trabajadoras, y que garantice uno de los mejores mecanismos para la igualdad de oportunidades. En nuestro proyecto de país, se tienen que derogar de forma inmediata todas las leyes que permiten la privatización de la sanidad, de la educación a todos los niveles, o del sistema de residencias. Al tiempo que se retira de las manos de los intereses capitalistas aquellos servicios de los que depende la dignidad vital de las grandes mayorías de nuestro país, es perentorio aumentar de forma muy significativa la financiación pública de los mismos. En vez de aumentar el gasto en armamento, como ha hecho el gobierno de Sánchez a lo largo de esta legislatura y como pretende hacer todavía más, lo que hay que hacer es aumentar las partidas en sanidad, educación y cuidados. Esto es necesario para reforzar la atención primaria y garantizar la atención en el medio rural, reducir al mínimo las listas de espera sanitaria, bajar los ratios en los colegios e institutos, garantizar que la educación universitaria no sea un privilegio de unos pocos, dar cobertura pública universal y gratuita a la educación infantil de 0 a 3 años, garantizar, entre otras cosas, la asistencia suficiente para todas las personas dependientes de todas las edades y sean cuales sean sus circunstancias vitales. Frente a un gobierno supuestamente progresista que acaba de aumentar más de un 41% el dinero público que entrega a la sanidad privada a través de MUFACE, y frente a unas derechas que miran a Estados Unidos, donde millones mueren a causa de graves enfermedades por no poder hacer frente a los costes de la atención sanitaria privada, nosotras lo tenemos muy claro: el mejor patriotismo es el que se siente orgulloso de unos servicios públicos que no dejen que ninguna persona se quede tirada a la vera del camino.

Para ello, por supuesto, es indispensable llevar a cabo una reforma fiscal que haga que las grandes empresas y las grandes fortunas de este país paguen de una vez lo que tienen que pagar. Hace falta aprobar un verdadero impuesto a los grandes patrimonios, establecer de forma efectiva un tipo impositivo mínimo en el impuesto de sociedades que evite, como ocurre ahora, que las grandes corporaciones tributen menos porcentualmente que una pyme, hay que aprobar impuestos extraordinarios por encima del tipo habitual a aquellos sectores empresariales y oligopólicos que obtienen unos beneficios desproporcionados al tiempo que se aprovechan de las economías familiares —como puede ser la banca o las

grandes energéticas— y hay que implementar, en particular, un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas del IBEX que alcance el 50% de los mismos sin olvidar que repartieron un récord de 40.000 millones en dividendos en el año 2024, hay que igualar los rendimientos del capital a los rendimientos del trabajo en el IRPF porque no puede ser que salga más barato tener millones de euros en acciones que cobrar un salario, hay que establecer impuestos al lujo y a la alta huella de carbono en la que incurren los millonarios cuando utilizan sus aviones privados, sus yates o sus coches de alta cilindrada y hay que reforzar de forma significativa las plantillas de la Agencia Tributaria para perseguir con mayor eficacia el fraude fiscal, mayoritariamente localizado en las capas de ingresos más altos. Si de verdad queremos tener unos servicios públicos universales y de calidad que sean dignos de lo que merece nuestro pueblo, es indispensable aumentar la recaudación del Estado y esto no se puede hacer aumentando los impuestos a la clase trabajadora, a los autónomos o a las pymes, sino que tiene que hacerse aumentando los impuestos a los de arriba. No hay justicia social sin justicia fiscal. Como sabemos, un planteamiento como éste implica automáticamente la violencia política y mediática contra cualquiera que lo proponga. Por eso, una vez más, hace falta una izquierda fuerte que esté dispuesta a pagar el coste que nos hacen pagar si queremos llevar a cabo transformaciones de verdad.

Por supuesto, no podemos olvidar tampoco la necesidad de mejorar los salarios y las pensiones en nuestro país, aumentando muy específicamente el salario mínimo y las pensiones contributivas más bajas, así como las pensiones no contributivas de forma que ninguna pensión sea inferior al SMI, protegiendo además el sistema público de pensiones de la voracidad del capitalismo de depredador. No podemos tampoco olvidar la necesidad de aumentar el ingreso mínimo vital y reducir su burocracia, ampliando el número de personas cubiertas y evitando que ninguna familia viva en la pobreza, como primera fase para caminar hacia una futura renta básica incondicional. Hay que mejorar los ingresos de las familias y también hay que trabajar a brazo partido para reducir sus gastos más importantes. En este sentido, es indispensable una intervención del mercado eléctrico para acabar de una vez y para siempre con la fijación de precios marginalistas, prácticamente una estafa, y establecer un sistema de subasta que tenga que ver con el coste de producción de cada megavatio-hora. Esta es la forma no solamente más eficaz de bajar la factura, sino también la forma más eficiente de avanzar hacia un sistema de producción energética internamente basado en energías renovables. Del mismo modo, hay que intervenir los márgenes de beneficio de la alimentación para evitar lo que hemos visto en los últimos años, en los que se ha combinado una inflación absolutamente desbocada con un aumento de los beneficios de las grandes cadenas de supermercados, como Mercadona. Esta intervención, por supuesto, ha de hacerse garantizando la sostenibilidad económica tanto de los pequeños comercios como de los pequeños y medianos productores familiares y tradicionales del sector primario español. En el ámbito del transporte, otro de los principales epígrafes de gasto de las familias, es indispensable mantener y ampliar las bonificaciones públicas en el transporte urbano e interurbano. No sólo como una manera de garantizar la igualdad de oportunidades y ayudar a las familias trabajadoras a llegar a fin de mes, sino también como uno de los mecanismos más eficaces para descarbonizar nuestra economía, apostando por la sostenibilidad del transporte. En el ámbito de la transformación digital, se debe asumir la regulación de la Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta su impacto en el medio ambiente y el empleo, prestando especial atención a los trabajos creativos.

Otro de los gravísimos problemas que afectan a nuestra sociedad y al conjunto del planeta, y que no se podrán resolver si no existe una izquierda valiente que se enfrente con decisión a los grandes poderes que mandan sin presentarse a las elecciones, es el problema del calentamiento global y la crisis ecológica. Como resulta evidente, quienes más contaminan son quienes más tienen. La huella del carbono de un multimillonario que vive en La Moraleja es cientos de veces superior a la huella de carbono de una persona trabajadora que vive en un barrio popular. Al mismo tiempo, quienes más contaminan, con muchísima diferencia, son las grandes empresas del petróleo, de los hidrocarburos y de la energía. Por ello, no tiene sentido plantear una transición ecológica que no tenga en cuenta el componente de clase. Primero, porque si obligamos a la clase trabajadora a llevar a cabo enormes esfuerzos individuales, que tienen que ser añadidos a los propios esfuerzos que deben desempeñar para llegar a fin de mes, mientras no se aprecia justicia climática con los de arriba, va a ser muy difícil recabar el consenso social que hace falta para tomar medidas drásticas en la protección del medio ambiente. Pero también porque, si limitamos las medidas a la forma de vida de los de abajo, no vamos a estar abordando la principal causa del problema. Si de verdad queremos frenar, a nivel planetario, las emisiones de gases de efecto invernadero que nos están llevando al borde del precipicio, es no solamente justo, sino también lo único verdaderamente eficaz obligar a los de arriba a que reduzcan sus emisiones y a que paguen por la transición que tenemos que hacer.

Así, debemos intervenir y modificar de forma drástica el mercado de la energía para que dejemos de entregar miles de millones de euros de dinero público y también de dinero de las familias a las grandes empresas energéticas del oligopolio, a través de los “beneficios caídos del cielo”. Solamente si retribuimos cada megavatio-hora a un precio que tenga que ver con su coste de producción, las energías más contaminantes van a dejar de ser rentables y la propia lógica económica va a impulsar que tengamos un pool cien por ciento renovable más pronto que tarde. Esto, además, va a producir una factura de la luz mucho más justa, que todavía puede mejorarse si establecemos un pago progresivo según el consumo. De esta manera, aquellas personas que tengan una vivienda muy grande o amplias extensiones de terreno pagarían proporcionalmente mucho más que cualquier familia trabajadora que habite en una vivienda de tamaño normal. En todo caso, y mientras siga existiendo un oligopolio energético que obtiene beneficios millonarios a costa de los bolsillos de las familias, se tienen que aumentar los impuestos sobre sus beneficios y se deben utilizar los fondos públicos así obtenidos para acelerar la transición energética. Al mismo tiempo, es indispensable crear una empresa pública de energía que no solamente pueda competir de tú a tú con los gigantes privados, bajando así la factura, sino que además sirva para gestionar dicha transición de una manera social y territorialmente justa, poniendo el bien común como su principio director. Por supuesto, hay que mantener y ampliar las bonificaciones al transporte urbano e interurbano, no solamente como medida de justicia social, sino también como una de las medidas más eficaces para descarbonizar el parque móvil. Para ir avanzando hacia un parque automovilístico cada vez más electrificado, se deben ampliar y mejorar las zonas de bajas emisiones en las ciudades y hay que aprobar un ambicioso plan de ayudas para que las familias con menos recursos y las personas trabajadoras que tengan que acceder al centro de nuestras grandes urbes puedan tener acceso a un coche eléctrico al mismo precio que les costaría su alternativa de gasolina o de diésel. Es muy beneficioso que podamos tener ciudades libres de humo, y que cada vez tengamos

menos coches que funcionan con combustibles fósiles, pero esta transición no puede hacerse sobre las espaldas de la clase trabajadora. Por el mismo motivo, se deben establecer importantes impuestos a todo tipo de vehículos y actividades de lujo que tengan una alta huella de carbono o que sean intensivos en el consumo de recursos naturales, como los campos de golf, los aviones privados, los coches de alta cilindrada o los yates. Además, hay que aprobar un paquete ambicioso de leyes que impida que los grandes fondos buitres internacionales se sigan quedando cada vez con más hectáreas de nuestro campo. Es vital proteger y garantizar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas producciones agrícolas y ganaderas de nuestro país, no solamente por un motivo de justicia social y de soberanía alimentaria, sino también por un motivo medioambiental. Los fondos buitres que hacen negocio con nuestro campo lo hacen también a costa del expolio descontrolado de nuestros recursos naturales básicos, muy especialmente del agua. Si queremos que España sea sostenible hídricamente y que no tengamos que sufrir restricciones de riego y de agua potable debido a la sequía cada pocos años, es imperativo que arrebatemos los derechos extensivos de riego que están acaparando sistemáticamente los fondos especulativos. Es necesario transformar el sistema de producción y distribución de alimentos hacia un modelo agroecológico que reduzca la dependencia de energías fósiles y promueva la soberanía alimentaria. Desde la perspectiva ecofeminista que caracteriza a Podemos, se debe plantear un cambio radical del sistema económico y social, superando el capitalismo para garantizar la sostenibilidad y la justicia social. Es clave incluir la perspectiva rural en todas las políticas y fortalecer los servicios públicos en estas zonas, como medida fundamental para luchar contra la despoblación.

Además, y adoptando una visión amplia sobre lo que significa ser la especie más poderosa que habita este planeta, desde Podemos queremos seguir recorriendo ese camino que iniciamos en la legislatura pasada con la aprobación de las primeras leyes de protección animal de nuestro país, ampliando la misma a aquellos animales que aún siguen desprotegidos —como los perros de caza, tras el vergonzoso pacto entre el PSOE y VOX— e incorporando también nuevos derechos como la inclusión de la asistencia veterinaria gratuita y universal en el sistema público de salud. Del mismo modo que no tiene sentido que una familia se tuviera que endeudar a perpetuidad para curar la enfermedad de uno de sus bebés, tampoco tiene sentido que la posibilidad de mantener sanos a los miembros no humanos de la familia dependa de la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta bancaria. La ferocidad con los de arriba y la ternura con los más débiles que vertebran nuestro proyecto político también alcanza a nuestros compañeros no humanos de planeta y de vida; algo de lo que estamos enormemente orgullosas y que nos parece una de las mayores señales de empatía y de decencia.

Por último, no podemos olvidar que la única forma de poder llevar a cabo estos cambios profundos en nuestro país —o cualquier otro que se oriente en una dirección emancipadora y de expropiación del poder y los privilegios de los de arriba— será imposible o tendrá una vida muy corta si no va acompañado de profundas reformas políticas en el sistema democrático e institucional. Como nos han demostrado los reaccionarios en innumerables ocasiones durante la última década, la única manera de que un programa de izquierdas ecológico, feminista y de justicia social se pueda llevar a cabo en España o en cualquier otro país del

mundo es si, al mismo tiempo, se impone una democratización profunda de aquellos lugares de poder en los que se antrinchera la reacción y desde los que mandan más que los ministros y los diputados, e incluso que el presidente del Gobierno, sin presentarse a las elecciones. Una fuerza política que tenga una verdadera voluntad de rediseñar las relaciones económicas de poder en nuestra sociedad, de garantizar una vida digna para todas las personas y de blindar los avances sociales para que no se puedan revertir, tiene también que defender con fiereza la democratización del poder judicial, la limitación drástica del control oligárquico de los medios de comunicación, el establecimiento de métodos habituales de participación ciudadana como los referéndums o los presupuestos participativos y las reformas profundas que sitúen a todos los cuerpos funcionariales del Estado — muy especialmente a aquellos que tienen el monopolio del uso de la fuerza— bajo control democrático y al servicio del interés general de su pueblo. Mientras siga existiendo la impunidad absoluta para jueces y periodistas corruptos, mientras la policía se siga utilizando para infiltrar movimientos sociales o para levantar falsos atestados contra activistas de izquierda, mientras siga habiendo Ley Mordaza, mientras se sigan creando comandos policiales como las cloacas que creó el PP, mientras siga siendo posible apretar botones de emergencia golpistas desde las zonas más oscuras del poder mediático y estatal cuando aparece una fuerza política como Podemos, el cambio social será imposible. Esto es algo que debemos grabarnos a fuego.

Y no debemos olvidar tampoco de dónde vienen estos comportamientos mafiosos y autoritarios en el seno de las estructuras de poder. Si la democracia española contiene déficits tan enormes en su funcionamiento, es, en buena medida, porque el dictador murió en la cama y se mantuvieron la práctica totalidad de los elementos franquistas en las grandes empresas, en los medios de comunicación, en la judicatura, en el ejército y en buena parte de las estructuras del Estado. Por eso, no podemos perder de vista la necesidad de impulsar la memoria democrática; porque la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no solamente es una obligación de cualquier país mínimamente digno, sino también porque, además, el conocimiento de nuestra historia es la mejor brújula para llevar a cabo una democratización profunda en el presente. Hace cinco décadas que murió Franco, pero el franquismo sigue vivo en muchos ámbitos de nuestra sociedad y de nuestro Estado. El relato oficial cuenta que España se acostó franquista y se levantó 100% democrática, una democracia liberal homologable a la de cualquier país europeo y eso no es cierto. Los crímenes de la represión y de la dictadura siguen impunes. Podemos, es una herramienta para la justicia social y la ampliación y defensa de los derechos de la ciudadanía. También lo es para impulsar los derechos que emanan de la memoria democrática, que son derechos humanos, derechos de las víctimas y por extensión, de toda la sociedad. Es necesaria la recuperación de la memoria, junto a las entidades memorialistas, poner en el centro la inclusión de la memoria democrática en el ámbito educativo, de manera transversal, y señalar la pervivencia franquista en el sistema, a todos los niveles, desde la élite económica a los medios de comunicación, pero apuntando principalmente a las herramientas de control que se reservó el franquismo: monarquía, judicatura, fuerzas de seguridad. Es necesario, también, que se impulse el laicismo en las instituciones públicas, acabando con el concordato de la Santa Sede, y con los privilegios fiscales de la Iglesia Católica en nuestro país. Hay que apostar por una enseñanza pública de calidad, inclusiva y laica.

En España no ha habido, desde nuestra Guerra Civil, ninguna crisis de Estado pero sí crisis de régimen. Y en los últimos años la crisis del régimen del 78 es una evidencia no solo porque saltó el sistema de partidos sino por la propia reacción de los sectores conservadores que dominan el Estado. El fin de las condiciones para el entendimiento entre las fuerzas del bipartidismo tradicional ha configurado dos campos políticos. El de la derecha política (PP y VOX) junto a sus aliados en el poder económico, mediático y en sectores estratégicos del Estado como la judicatura, las FFAA y las FSE y, sobre todo, la monarquía. Ese bloque, otanista y con sus aliados europeos gobernando en casi todas partes incluida la Comisión Europea está llamado a ejercer una dirección de Estado en clave involucionista y recentralizadora. Frente a ese proyecto de dirección de Estado, Podemos debe impulsar una dirección de Estado en clave Republicana y plurinacional. Por supuesto, esa dirección debe incluir la democratización profunda de todos los aparatos del Estado así como del poder mediático y la reforma valiente del sistema económico para garantizar de forma efectiva la libertad de las personas mediante una redistribución de la riqueza que permita acabar con las penurias materiales en las que viven millones de compatriotas; pero también incluye, y esto no debemos olvidarlo, el reconocimiento del derecho a decidir de todos los pueblos que configuran nuestro país de países, algo que solamente Podemos, como fuerza política de ámbito estatal con voluntad y capacidad de gobernar, ha sido capaz de poner encima de la mesa con fuerza en los últimos años. Ese proyecto es una única salida para un PSOE que sigue encerrado en el lecho de Procusto del régimen del 78 que se ha convertido en su ataúd. Al mismo tiempo, la apuesta por un modelo confederal de soberanías compartidas es la única alternativa para una alianza estratégica que supere el malmenorismo como frágil pegamento de un bloque inviable si solo es bloque de investidura. La República en nuestra época ya no es solamente el horizonte de cualquier persona de izquierdas o incluso de cualquier verdadero demócrata. Con las hordas oscuras de la extrema derecha levantando las horcas y las antorchas, la República es ahora también el único horizonte político que puede aglutinar a un amplio bloque social que va desde la antigua socialdemocracia a la izquierda transformadora, pasando por los diferentes nacionalismos e independentismos. Vivimos en tiempos de una bifurcación histórica. Ante nosotras, el camino se divide en dos: o la involución reaccionaria, la plutocracia, la destrucción del Estado social y la guerra, o la República plurinacional. En Podemos siempre hemos tenido claro el horizonte y hacia él vamos a seguir caminando.

